



SOCIAL WATCH

I N F O R M E 2 0 1 0

VERSIÓN
ABREVIADA

Cambiamos las reglas de juego **DESPUÉS DE LA CAÍDA**



PARA CONFRONTAR LOS DRÁSTICOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LAS MÚLTIPLES CRISIS, ES NECESARIO IR MÁS ALLÁ DEL ENFOQUE DE “MÁS DE LO MISMO”; NECESITAMOS UN PROGRAMA INTEGRAL DE JUSTICIA: **JUSTICIA CLIMÁTICA** (RECONOCER LA “DEUDA CLIMÁTICA”, INVERTIR EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y EN LA PROMOCIÓN DE ECONOMÍAS VERDES QUE GENEREN EMPLEOS DECENTES); **JUSTICIA FINANCIERA, FISCAL Y ECONÓMICA** (EL SECTOR FINANCIERO DEBE PAGAR LA CRISIS QUE GENERÓ). **JUSTICIA SOCIAL Y DE GÉNERO** (CUMPLIR CON LOS ODM, PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO. LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS UNIVERSALES Y LA “DIGNIDAD PARA TODOS”) Y... **JUSTICIA LISA Y LLANA** (JUECES Y TRIBUNALES) QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA GENTE.

UN INFORME CIUDADANO SOBRE EL PROGRESO EN LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y EL LOGRO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO

La versión completa del informe Social Watch 2010 incluye:

Estimado/a líder:

Roberto Bissio

Después de la caída: el imperativo de un *New Deal*

Roberto Bissio

INFORMES TEMÁTICOS

La crisis económica: hora de un nuevo acuerdo social

Edward Oyugi, Social Development Network

El género en tiempos de crisis: se necesita un nuevo paradigma de desarrollo

Grupo de Trabajo de Género de Social Watch

Nace ONU Mujeres: ¿estará a la altura de los desafíos?

Genoveva Tisheva y *Barbara Adams*

El clima planetario: el derrumbe de Copenhague

Md Shamsuddoha, Equity and Justice Working Group

Bangladesh

La financiación climática y los ODM

Ian Percy

Participación accionaria crítica: cómo apoyarse en las finanzas para promover los derechos humanos y el medioambiente

Andrea Baranes, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM)

Mauro Meggiolaro, Fundación Cultural Responsabilidad Ética

Privatización de las finanzas europeas para el desarrollo: el rol del Banco Europeo de Inversiones

Antonio Tricarico, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM)

El Tratado de Lisboa y las nuevas perspectivas para la política de desarrollo de la UE

Mirjam van Reisen, Europe External Policy Advisors (EEPA)

Simon Stocker, Eurostep

Los Estados árabes y los ODM:

no habrá avances sin justicia social

Ziad Abdel Samad, Arab NGO Network for Development (ANND)

EL PROGRESO HACIA LAS METAS

Índice de Capacidades Básicas

A Diez años de la Declaración del Milenio

El progreso de los indicadores sociales se ha enlentecido

Índice de Equidad de Género

Ayuda Oficial para el Desarrollo neta por Países del Comité de Asistencia al Desarrollo

Gasto público

Ratificación de los tratados internacionales mencionados en la Declaración del Milenio

Ratificaciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo

E informes nacionales de:

Afganistán, Alemania, Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Benín, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos De América, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Italia, Kenia, Líbano, Malasia, Malta, Marruecos, México, Moldova, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Palestina, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Centroafricana, República Checa, Senegal, Serbia, Somalia, Suiza, Surinam, Tailandia, Tanzania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen y Zambia.

Estimado/a Líder:

Sabemos que Usted es una persona muy atareada y que la presente carta puede estar llegando a Sus Manos cuando se esté preparando para ir a Nueva York a participar de la Cumbre de Naciones Unidas que revisará los objetivos mínimos de desarrollo social que Usted y Sus Colegas se comprometieron a cumplir para el año 2015.

Aún así, conscientes de cuán ocupado/a está Usted, estimado/a Líder, nos atrevemos a pedirle que continúe leyendo, primero porque es bueno que gobernantes compasivos como Su Excelencia tengan a bien escuchar de vez en cuando la voz de sus gobernados, y segundo porque puede ayudarle a Usted a no caer en la tentación de cantar victoria allí donde no la hay.

¿Recuerda que uno de Sus Colegas dijo “Misión cumplida” hace ocho años? ¿Y que luego la guerra que aseguró haber ganado siguió y que el candidato que se animó a decir que la invasión había sido un error ganó las siguientes elecciones por abrumadora mayoría? Sí, por supuesto, nadie está pensando en poner un cartel en Su Espalda que diga “¡objetivos alcanzados!” cuando sea Su Turno de hablar ante la Asamblea General, pero muchos formadores de opinión quieren que Usted sume su voz a la teoría del “vaso medio lleno” o aquellas que dicen que “estamos muy cerca” por lo que se sentirá Usted tentado a sostener que basta un esfuerzo extra sobre el final para lograr en los próximos cinco años el objetivo de erradicar la pobreza, tarea que, en realidad, jamás comenzó en momento alguno de los últimos diez años.

Este informe le ayudará a Usted a pensar dos veces. La opinión pública y la prensa tienen buena memoria, Su Excelencia, y para complicar aún más las cosas, todos y todas podemos leer en Internet la Declaración del Milenio, en la que hace diez años 189 líderes mundiales como Usted se comprometieron a no escatimar esfuerzo alguno “para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos” y acordaron reducir esa proporción a la mitad para el año 2015.

Tal como ya le deben haber advertido sus asesores, en 2008 uno de sus ministros firmó el Plan de Acción de Accra que afirma que “1.400 millones de personas – en su mayoría, mujeres y niñas – siguen viviendo en la pobreza extrema” y el Banco Mundial, que es la fuente de esas cifras (y que mantiene la falsa ilusión de que la pobreza se puede describir únicamente en base al ingreso, cuando todos sabemos que es compleja y multidimensional), ese mismo Banco Mundial, ha estimado en enero de este año que “otros 64 millones de personas vivirán en pobreza extrema para 2010

debido a la crisis”. Tendrá Usted que desafiar sus habilidades matemáticas para tratar de explicar a la prensa cómo es posible que 1.500 millones de personas que viven hoy en la extrema pobreza puedan ser consideradas en vías de reducir “más de mil millones” a la mitad.

De hecho, el asunto ni siquiera es si el mundo puede alcanzar o no los objetivos de aquí a cinco años. Los ODM nunca fueron concebidos como planificación de objetivos sino que siguen siendo compromisos políticos realizados por líderes como Usted para definir públicamente prioridades. Son valiosos porque se pueden utilizar como puntos de referencia para evaluar el progreso. Y numerosos análisis muestran que el progreso en los indicadores sociales, de hecho, ¡ha disminuido desde el año 2000 en vez de acelerarse!

No es que dudemos de Su capacidad para abordar y convencer al público, por supuesto. A falta de ese atributo, Usted no hubiera sido elegido por Su Pueblo (si no ha sido Usted elegido por voto popular, por favor corrijanos y pediremos de forma pública las disculpas correspondientes). Pero incluso para un orador tan elocuente como Su Excelencia, será difícil sostener que “no se ha escatimado esfuerzo alguno” en la lucha contra la pobreza cuando los gastos militares a nivel mundial del año pasado superaron en quince veces el total de la ayuda recibida por los países en desarrollo y fueron 49% mayores a los gastos en el año 2000, fecha en que Sus Colegas prometieron “establecer una paz justa y duradera en todo el mundo”.

Además de evitarle a Usted cometer el vergonzante error de clamar victoria allí donde no la hay, la lectura de esta decimoquinta edición del informe anual de Social Watch lo/a ayudará a mantenerse en sintonía con las preocupaciones y el sentir de Sus ciudadanos y ciudadanas. Este informe es, de hecho, el resultado de un proceso de abajo hacia arriba. No es una opinión encargada a consultores sino las conclusiones de cientos de organizaciones y movimientos sociales que trabajan todo el año sobre temas de desarrollo social. El objetivo de contribuir a este esfuerzo es, precisamente, llamar la atención de los Líderes como Usted hacia las cuestiones que les preocupan y ayudar a Usted a cumplir sus promesas y diseñar políticas más equitativas, con sensibilidad de género y a favor de los pobres.

Cada una de las coaliciones de Social Watch determinó sus prioridades y temas para escribir su informe nacional y cada una buscó sus propios fondos y definió cómo consultar con las bases para reunir evidencias y así validar sus resultados. No les faltó coraje a la hora de criticarlo a Usted y a Su Gobierno, a las políticas vigentes, a las élites poderosas

de su país o a los sistemas de gobernanza cada vez que creyeron necesario. Esperamos que Usted esté de acuerdo con nosotros en que la expresión de voces críticas ayuda a fortalecer los procesos democráticos. Pero aún cuando los informes encuentran que todavía se puede (y debe) mejorar mucho bajo Su Liderazgo, también sabemos que hay otros 191 líderes que comparten la cuota de responsabilidad con Usted y, por tanto, en promedio, sólo el 0,5% de la culpa le corresponde a Usted en lo personal.

Colectivamente, sin embargo, cuando Usted y Sus Colegas se reúnan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendrá Usted toda la responsabilidad por sus actos, así como por sus omisiones, ya que no existe mecanismo mundial de gobernanza con mayor autoridad. Sí, sabemos que algunos organismos especializados y otras organizaciones están a cargo de las finanzas o el comercio y que tienen sus propios procesos de toma de decisiones, pero, ¿quién se sienta en sus respectivas asambleas, sino los ministros que Usted eligió y que están a su cargo?

Sabemos que Su capacidad de atención es escasa y que Usted tiene muchas cosas que atender. Puede Usted sostener que Sí, que la pobreza es una prioridad para Usted y que la igualdad de derechos para las mujeres es una causa a la que Usted y su pareja se han comprometido, cualquiera sea su respectivo género. De hecho, nunca hemos encontrado Líder alguno que adoptara una posición contraria y defendiera la pobreza, la esclavitud o negara la educación a las niñas. Pero hay otras urgencias que requieren Su tiempo e incluso si Usted ha leído esta carta hasta aquí puede sentirse tentado a no leer el informe completo y tal vez alguno/a de sus asesores/as lea el resumen y le transmita algunos puntos clave.

Si sigue Usted leyendo estas líneas podrá ahorrarse incluso ese esfuerzo. El mensaje final que surge de este informe es simple: al igual que todo el mundo entiende que es necesario cumplir las promesas realizadas y que es justo que se las recuerden a Usted, ciudadanos y ciudadanas de todas partes adhieren al principio de “los contaminadores pagan”. Quienes crearon el problema deben pagar por la limpieza y los daños que causaron. Y eso es válido tanto para los derrames de petróleo, el cambio climático o la crisis financiera.

Si se aplican los principios básicos de la justicia, se pueden encontrar los recursos para crear el “mundo más pacífico, más próspero y más justo” que todos Ustedes los Líderes nos prometieron hace una década. Podemos incluso ser tolerantes con Su Vergonzoso Retraso en esa tarea, al igual que esperamos que Usted sea tolerante con algunas de las frases impacientes y acaso irrespetuosas incluidas

en este informe. Como puede Usted comprender, después de una década de ver que las palabras no coinciden con las acciones, algunos esperamos que Usted “se ponga a patear traseros”, si me perdona la expresión. De hecho, es ésta una tarea que Usted debería acometer. Cuanto antes, mejor. Nos comprometemos a aplaudir fuerte. ■

Respetuosamente le saluda,

ROBERTO BISSIO
en nombre de Social Watch

PD: Cualquier ayuda que pueda Usted necesitar para encontrar el lugar exacto en dónde patear, por favor siga leyendo este informe.

Después de la caída: el imperativo de un *New Deal*

Roberto Bissio
Secretariado Internacional de Social Watch

La buena noticia es que la estrategia *Primero la gente* funciona. *Primero la gente* fue el título del informe anual Social Watch 2009 y su mensaje central. Sostuvimos, basándonos en evidencia proveniente de todo el mundo, que el imperativo ético de invertir en las personas que viven en la pobreza, mujeres en particular, era también la mejor estrategia económica para luchar contra la crisis económica mundial luego del colapso de Wall Street a finales de 2008.

Un año después, esto es exactamente lo que pasó en lugares tan distantes como China y Brasil, dos países en desarrollo severamente afectados por la crisis que tomaron medidas rápidas y decisivas para estimular el consumo local mediante la ayuda a la gente más pobre. Según la coalición Social Watch de Brasil la “recuperación se logró gracias a la fortaleza de la demanda interna, alimentada por: políticas de aumento del salario mínimo; políticas sociales, de las cuales la Bolsa Familia (subsidio familiar) es la más importante; políticas de expansión del crédito otorgado por los bancos públicos; y, en menor grado, políticas fiscales bajo el paraguas del programa conocido en Brasil como Programa de Aceleración del Crecimiento. Los grupos de bajos ingresos también fueron objetivo de las políticas: aumentó el número de personas pobres que reciben beneficios en efectivo (equivalente a un mes de salario mínimo), entre otros, quienes tienen un ingreso familiar igual o menor a 25% del salario mínimo per cápita, personas con discapacidades y personas pobres mayores de 65 años, también se otorgaron beneficios jubilatorios ampliados para los trabajadores rurales (aunque no hayan hecho contribuciones previas)”.

Los menos de USD 7 mil millones que se invirtieron en Bolsa Familia no sólo fueron un éxito en la reducción de la pobreza sino que también brindaron “un apoyo importante a la demanda interna, en particular de bienes de consumo perecederos. Debido a que las familias pobres consumen todo su ingreso, estos subsidios se tradujeron en un aumento directo a la demanda, generando un piso frente a cualquier eventual reducción de los gastos en consumo en el país. Los gastos basados en la Bolsa Familia también tienen un impacto expansivo indirecto sobre la demanda y el nivel de actividad económica. Los gastos originales se transforman en los ingresos de otras personas, que también serán gastados con un estímulo adicional a otras actividades. La naturaleza descentralizada del programa permite que estos estímulos estén dirigidos a actividades locales, ampliando el impacto sobre el empleo y el consumo adicional”.

La mala noticia es que en todo el mundo la mayoría de los países dirigieron billones de dólares al otro extremo de la cadena económica, a través de recortes de impuestos a los ricos o subsidios a los bancos y grandes corporaciones y luego esos planes, que en realidad no ayudaron a reducir el desempleo, se suspendieron o redujeron tan pronto como el sector financiero comenzó a ser rentable nuevamente.

Es el caso, por ejemplo, de Canadá, donde la coalición Social Watch local informa que “la reducción del déficit se está logrando mediante mayores recortes a los gastos sociales. Mientras se recuperan el mercado de acciones y el Producto Interno Bruto (PIB), se esperan mayores retrocesos en los niveles de equidad y desarrollo tanto internos como en el extranjero”.

Algunos países en desarrollo dan cuenta de efectos aún más devastadores de la crisis. En Indonesia, por ejemplo, Social Watch nacional informa que “la crisis financiera mundial le ha impuesto una carga adicional a Indonesia, que ya enfrentaba problemas tales como una gran deuda externa, corrupción y políticas macroeconómicas que no se han traducido en pasos concretos para erradicar la pobreza. Los más castigados han sido los trabajadores, ya que las empresas despiden empleados como primera opción para salvar sus activos”.

Según las estimaciones del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, la cantidad de personas en todo el mundo que pierden sus trabajos o caen por debajo de la línea de extrema pobreza se cuenta por decenas e incluso cientos de millones. En muchos países, Eslovaquia entre ellos, los informes de Social Watch local observan una tendencia de los políticos a promover la “discriminación y la intolerancia” como forma de controlar las cifras de desempleo de doble dígito.

Promesas sin cumplir

Hace una década, en la Cumbre del Milenio, más de 100 jefes de estado o gobierno firmaron este compromiso: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos”. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), extraídos de la Declaración del Milenio, establecieron metas con plazos concretos, la primera de las cuales era reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza y que padecen hambre. Los ODM en conjunto resumieron las tareas colectivas más urgentes de la comunidad internacional, crearon puntos de referencia y acordaron patrones respecto a los cuales se puede hacer responsables a los gobiernos y organizaciones internacionales y que

inspiraron movilizaciones mundiales sin precedente, como la campaña de 2005 “hagamos que la pobreza sea historia”, con miles de millones de personas en todo el mundo mirando los conciertos “Live 8” que se celebraron en simultáneo.

En declaraciones a los jefes de Estado en septiembre de 2005, cuando se revisaron los ODM, cinco años después de la Cumbre del Milenio, Leonor Briones, de Social Watch Filipinas, dijo en nombre de las organizaciones de la sociedad civil: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzarán para 2015 [si] el medioambiente continúa siendo devastado y siguen sin resolverse las cuestiones sobre comercio, deuda y asistencia oficial para el desarrollo”.

El Objetivo 8 de los ODM pidió explícitamente el establecimiento de *asociaciones mundiales* en torno al comercio, la ayuda, la cancelación de la deuda y la transferencia de tecnología con el fin de permitir que los países en desarrollo alcancen los otros siete objetivos que conciernen a la pobreza y el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género y la sostenibilidad del medioambiente.

Se han hecho algunos progresos hacia esta meta en cuanto a la cancelación de la deuda externa bilateral y multilateral de algunos de los países más pobres, Nigeria e Iraq, pero esto dista de ser suficiente. En cuanto al comercio, no hay movimientos positivos. En septiembre de 2001 se inició en Doha una *ronda de desarrollo* de negociaciones comerciales. El componente de desarrollo de la misma es insignificante y aun así, todavía está lejos de estar concluido. La transferencia de tecnología se ha hecho aún más cara debido a la aplicación estricta de las normas de propiedad intelectual. La ayuda extranjera no ha aumentado en absoluto. Pasó de 0,44% del ingreso de los países donantes en 1992 a 0,43% en 2008.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en virtud del Objetivo 8 no deja ciertamente de tener relación con el deslucido avance de los otros Objetivos. El Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas reconoce este “fracaso para cumplir con la financiación necesaria, asistencia técnica y asociaciones” y añade que “se agravó por las crisis mundiales alimentarias y económicas así como por el fracaso de varias políticas y programas de desarrollo”. De esta manera, “las mejoras en la vida de los pobres han sido inaceptablemente lentas de lograr, mientras que algunos logros duramente ganados están siendo erosionados”¹. La distribución desigual de recursos en los países en desarrollo es otro obstáculo importante. Durante los primeros años del siglo 21,

¹ “Mantener la promesa: un examen orientado al futuro para promover un programa de acción convenido a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015”, documento A/64/665 de la Asamblea General, Naciones Unidas 2010.

muchos países en desarrollo experimentaron altos niveles de crecimiento económico, pero la reducción de la pobreza y la creación de empleo se quedaron atrás.

Sakiko Fukuda-Parr, ex editora del Informe sobre derechos humanos del PNUD sostiene que los ODM “fueron compromisos políticos, realizados por los líderes mundiales, que definen prioridades dentro de un marco normativo y que pueden ser usados como punto de referencia para evaluar el avance. En este marco, la pregunta apropiada es si se está haciendo más para estar a la altura de ese compromiso, dando lugar a un progreso más rápido”. La investigación que ella llevó a cabo mientras estudiaba la evolución de cada uno de los indicadores a través del tiempo, en lugar de mirar los objetivos que se cumplen, muestra que “por ejemplo, en tanto que el acceso al agua potable se promociona como un éxito de los ODM, sólo un tercio de los países mejoraron a un ritmo más rápido luego del 2000”. En resumen, “en la mayoría de los indicadores y en la mayoría de los países el progreso no se ha acelerado” en la última década cuando se lo compara con la anterior².

Un estudio del PNUD de las tendencias de desarrollo en las últimas cuatro décadas llega a la misma conclusión, como se refleja en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) desde 1970: “Encontramos que 110 de los 111 países muestran avances en sus niveles de IDH en un período de más de 35 años. El crecimiento del IDH es más rápido en los países con IDH bajo y medio en el período anterior a 1990”³.

Como era de esperar, esta es la misma conclusión a la que llega el análisis del Índice de Capacidades Básicas de la propia Social Watch, que combina algunos indicadores clave de los ODM (véanse las cifras de este mismo informe): si bien los indicadores sociales clave aún muestran avance, su mejoría se desacelera después de 2000.

Y estos resultados son consistentes con los informes de los miembros de la comunidad. En Nigeria, por ejemplo, los observadores locales perciben que “algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que casi todos los proyectos que se centran en cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio están retrasados”.

La visión oficial positiva de las evaluaciones de los ODM se basa principalmente en las cifras del Banco Mundial para el Objetivo 1. Definiendo y midiendo la pobreza por los ingresos únicamente, el Banco

Mundial llega a la conclusión de que el número de personas que viven bajo la línea de pobreza extrema de USD 1,25 por día disminuyó de 1,9 mil millones en 1981 a 1,4 mil millones en 2005, cuando se llevó a cabo la última encuesta internacional⁴.

Brasil, Vietnam, y en particular China, representan la mayor parte de esa reducción. De hecho, sólo en China, el número de personas bajo esa línea se redujo de 835,1 millones en 1981 a 207,7 millones en 2005. Una reducción de 627 millones en China, mientras que en el mismo período la reducción mundial fue de 500 millones, quiere decir que fuera de China, la pobreza tuvo un aumento en ese período de más de 127 millones de personas.

De hecho, según el informe de avance 2010 del Secretario General de las Naciones Unidas, el número de personas por debajo de la línea de pobreza de USD 1 por día “aumentó en 92 millones en el África subsahariana, y en 8 millones en Asia occidental durante el período entre 1990 y 2005”. Además, “la situación de pobreza es más grave cuando se consideran también otras dimensiones de pobreza, reconocidas en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995, tales como la privación, exclusión social y falta de participación”⁵. Y esas cifras se refieren a 2005, cuando se realizó una encuesta nacional de ingresos familiares que permitió la creación de la PPA (paridad de poder adquisitivo de diferentes monedas nacionales, que se utiliza para ajustar la línea de pobreza).

Desde el año 2005, según el Banco Mundial, la crisis alimentaria y la crisis financiera mundial han enviado al menos a otros 100 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Desde la perspectiva de los miembros de la comunidad, esto se resume en el informe de Social Watch Senegal en unas pocas dramáticas palabras: “además de extenderse, la pobreza se feminiza y es mayoritariamente rural”.

Se necesita más ayuda, pero no se la encuentra en ninguna parte

Muchas coaliciones nacionales Social Watch en los países afectados por la pobreza llegan a la conclusión de que la única manera de alcanzar los objetivos acordados internacionalmente para 2015 es a través de más ayuda de la comunidad internacional.

Este es el caso reportado por Social Watch Benín, donde los recursos del gobierno se encuentran limitados por la deuda externa e interna y la

inversión directa extranjera no está llegando en el volumen requerido, y no paga impuestos cuando lo hace, dejando al país a merced de los donantes extranjeros para pagar servicios sociales básicos que se necesitan con urgencia. La situación es similar en Tanzania, donde el informe local considera que “los esfuerzos del Gobierno para mejorar la vida de los tanzanos han sido en vano debido principalmente a la falta de compromiso con las estrategias, tanto a nivel nacional como internacional: el desembolso de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a menudo se demora y no acompaña el proceso del presupuesto nacional de Tanzania”.

En el territorio palestino ocupado (TPO) la entrada de ayuda ha creado lo que Social Watch nacional llama una “aparente mejoría” de la economía de la Ribera Occidental, pero el panorama general continúa siendo “frágil”, especialmente en la Franja de Gaza donde el asedio y el bloqueo por parte de Israel sigue socavando las perspectivas para el desarrollo, perpetuando una crisis humanitaria que se acentúa. Desde 2007, cuando se impuso el bloqueo, la pobreza extrema se triplicó en Gaza, que es probablemente el área más dependiente de la ayuda en el mundo, con más del 80% de la población que depende de la ayuda alimentaria.

Afganistán, otro país afectado por conflictos, es el segundo mayor receptor de ayuda (después de Iraq), pero aún así, los controladores ciudadanos locales concluyen que “es imprescindible recibir más y mejor asistencia”, dado que las condicionalidades asociadas con la asistencia al desarrollo y la práctica de condicionar la ayuda únicamente a comprar al país donante o a contratar a los nativos del país donante como consultores erosiona el beneficio de las donaciones. Se gasta mucho más dinero en la guerra de Afganistán que en ayudar a las personas y puesto que “casi todos los principales donantes son también partes beligerantes; no hay espacio para hablar de humanitarismo”.

Entretanto en Somalia, desgarrada también por las facciones en conflicto, la reticencia de los donantes para tratar con cualquiera de los grupos armados regionales o con las autoridades nacionales ha creado una situación en la que los “los recursos conseguidos por medio de la piratería son casi tan importantes como los que provienen de la Comisión Europea”. En una sociedad con sesgo de género como la de Somalia, la guerra y la pobreza se abaten más duramente sobre las mujeres, y los dedicados trabajadores de la sociedad civil, como los que informan a través de Social Watch, luchan contra la desesperación para preservar los vínculos de la comunidad como base de cualquier esfuerzo de reconstrucción futura.

La paz es una precondition, pero no es suficiente. En el Líbano, el informe de Social Watch local observa que “desde 1992 la arquitectura financiera

2 Sakiko Fukuda-Parr and Joshua Greenstein, “How should MDG implementation be measured: Faster progress or meeting targets?” Centro Internacional de Política para el Crecimiento Inclusivo–PNUD, Documento de trabajo número 63 mayo de 2010.

3 George Gray Molina y Mark Purser, “Human Development Trends since 1970: A Social Convergence Story”, Documento de Investigación sobre Desarrollo Humano 2010/02, PNUD, 2010.

4 Martin Ravallion, y Shaohua Chen, “The developing world is poorer than we thought but no less successful in the fight against poverty”, Banco Mundial, 2008; véase también ONU, Informes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2009, 2010.

5 *Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015*, Informe del Secretario General, febrero de 2010.

de posguerra combina políticas de reconstrucción expansionista con otras monetaristas restrictivas, dejando poco espacio fiscal para el desarrollo socioeconómico". La conclusión principal es que, para responder a las prioridades de reducción de la pobreza y discriminación, "el desarrollo debería estar basado en los derechos".

El caso de Guatemala demuestra que, en opinión de los observadores locales, "Los obstáculos y dificultades en el financiamiento para el desarrollo, impiden un efectivo combate a la hambruna, que continúa siendo una violación sistemática a los derechos humanos en el país. Así, el impacto de la ayuda para el desarrollo ha sido escaso, en particular en lo referido a las estrategias de reducción de la pobreza, el programa de paz y el cumplimiento de los ODM".

En Camerún los "controladores ciudadanos" se han unido a otras organizaciones de la sociedad civil en la demanda para que la gestión de la ayuda internacional sea más eficiente, mejorando la coordinación, involucrando a los ciudadanos y tomando en cuenta al género. Y del mismo modo en Marruecos, mientras que la AOD es "escasa", se enfrenta con importantes problemas de aplicación por la falta de esfuerzos concertados entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en el área prioritaria de la educación.

Una mayor aceleración en el avance hacia los ODM, según lo solicitado por las organizaciones internacionales, parece muy poco probable, teniendo en cuenta que a pesar de todas las pruebas con respecto a que esta es muy necesaria, la ayuda al desarrollo no ha aumentado sustancialmente en la última década y es probable que se reduzca como consecuencia de la crisis. Así, en Alemania, mientras que la canciller Angela Merkel insiste en que "asumimos el compromiso, y continuamos comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para África" como una "responsabilidad moral", el ministro de Desarrollo, Dirk Niebel, comenta que "no habría forma de que pudiéramos alcanzar el porcentaje de AOD de 0,51% en sólo un año" como se comprometió la UE. Las contribuciones de Alemania a la AOD en 2009 fueron de USD 2 millones menos que en 2008.

La Asistencia para el Desarrollo también se redujo en Polonia, aún cuando ya era muy poca, así como en España, revirtiendo una tendencia reciente a su aumento. Debido a la crisis financiera, la promesa de Portugal de mantener su nivel de ayuda es considerada cuestionable por los observadores locales. Bulgaria también se está quedando corta en el cumplimiento de los objetivos o en asegurar la calidad de su asistencia. Mucho peor es la situación en Italia, donde a pesar de haber presidido el G8 el año pasado, el Gobierno decretó el "desmantelamiento" de su cooperación al desarrollo. Algunos países como Malta, que mostró cifras positivas, son presentados por los observadores locales como in-

mersos en una contabilidad creativa, agregando a la AOD que informaron, recursos gastados localmente para ayudar a los inmigrantes y refugiados. Otros países como Eslovenia no tienen "una estrategia de cooperación para el desarrollo ni un sistema para evaluar la eficiencia de la ayuda". Y, por encima de esto "será difícil que pueda mantener sus compromisos en el contexto actual donde se producen recortes de presupuesto en casi todos los sectores".

Finlandia parece ser una de las pocas excepciones, ya que el nuevo Programa de Políticas de Desarrollo ha introducido un cambio resaltable. No obstante, los observadores de Finlandia todavía informan que "el enfoque de Finlandia con respecto al desarrollo social y los derechos sociales se ha debilitado", además del peligro de que los compromisos de mantener el porcentaje todavía podrían dar lugar a una disminución de las cifras absolutas debido a la contracción económica. Los mejores resultados reportados en este sentido son los de Suiza, donde después de realizar muchas campañas públicas el Gobierno ha presentado finalmente en junio de 2010 una propuesta para aumentar la AOD suiza.

La cooperación Sur-Sur es la fuente de muchas esperanzas en este contexto, donde las economías emergentes se ven como nuevos mercados alternativos y también nuevas fuentes de ayuda. Sin embargo, Social Watch India señala que en su comportamiento como donante "impone a su asistencia externa las mismas condiciones que se niega a aceptar como país receptor, siendo la más común la vinculación de la asistencia a la compra de bienes y servicios".

Dado que la ayuda externa puede en el mejor de los casos complementar los esfuerzos nacionales para lograr la dignidad básica para todos, según lo requerido por los ODM y las obligaciones de derechos humanos de todos los países, ¿de dónde van a venir los recursos? Muchos países en desarrollo desean atraer inversiones extranjeras directas (IED) para ayudar a satisfacer sus objetivos de desarrollo.

Sin embargo, en tiempos de crisis la IED tiende a comportarse, al igual que la AOD, de forma procíclica. Este es el caso de Serbia, donde los controladores ciudadanos locales informan que "el flujo de la Inversión Extranjera Directa se ha enlentecido como resultado de la crisis financiera mundial y la economía se torna aún más frágil e inestable. Las medidas para combatir la crisis se apoyan en solicitar nuevos préstamos a las instituciones financieras internacionales y en recortar el gasto público en educación, salud y pensiones – con el consiguiente peligro de que haya cada vez más personas pobres".

La inversión extranjera es una espada de doble filo

Los observadores de Zambia han encontrado que "la Inversión Extranjera Directa (IED) ha aumentado su papel en la economía del país, revitalizando la

industria del cobre y fomentando la producción y la exportación de productos y servicios no tradicionales. Sin embargo, esta inversión no se ha utilizado de manera eficaz para promover el desarrollo y reducir la pobreza. En cambio, está contribuyendo a la erosión de los derechos de las personas, entre ellos los derechos al desarrollo, el alimento, la educación, un medio ambiente limpio y la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas".

De modo similar en Nigeria, la Inversión Extranjera Directa "ha mejorado un poco, pero su impacto todavía no ha llegado a los pobres. La legislación que fomenta la IED debería complementarse con mecanismos que garanticen la transparencia. A pesar de que el Gobierno ha asignado recursos financieros – entre otros – a combatir la pobreza, la triste realidad es que, en los últimos 15 años, ésta ha seguido creciendo a un ritmo acelerado".

En Bolivia, "el modelo extractivo hace que la Inversión Extranjera Directa no genere mejores condiciones para Bolivia – ya que saca más dinero del que hace ingresar al país".

En Uganda, el Gobierno espera atraer al inversor y a la vez aumentar la participación ciudadana y el control de los asuntos públicos mediante la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en su gestión del desarrollo así como en varias áreas de la vida social. Las ONG locales informan a través de Social Watch que "para mejorar las condiciones de vida de los ugandeses, el esfuerzo debe acompañar las estrategias de reducción de la pobreza y las inversiones en desarrollo humano".

En muchos lugares, en lugar de ser complementarias, las mismas políticas que deberían hacer al país atractivo para los inversores extranjeros lo hacen vulnerable a conmociones extranjeras y destruyen el tejido social. La creencia del Gobierno de que "es posible reducir la pobreza y la inequidad mientras se adoptan pautas neoliberales es poco realista e insensato", concluyen los observadores de Croacia, donde la recesión de 2009 anuló varios años de mejoras sociales.

Los observadores de Hungría llegan a una conclusión similar: "a pesar de haber sido el primer país de Europa Oriental en adoptar las recetas del Fondo Monetario Internacional en 1982 y de que su nivel de desarrollo era superior al de sus vecinos cuando adhirió a la economía de mercado, Hungría es ahora la economía más débil de la región. Las razones para esto son múltiples y han llevado al país a oscilar entre un potencial levantamiento social – si no hay un cambio de dirección – y el colapso total de una economía muy vulnerable. El fantasma del extremismo de derecha acecha en las sombras, alimentado por el descontento popular".

En India, la coalición nacional Social Watch observa que la "IED también está aumentando el fenómeno del crecimiento sin empleo" y "aunque

los flujos de ingreso de IED han aumentado en el transcurso de los años, todavía está en duda su capacidad para proporcionar financiación que sirva de forma auténtica (e inclusiva) para el desarrollo. Para garantizar que beneficie al país en su totalidad, incluso a los negocios y las comunidades locales, las estructuras económicas del país deberán fomentar la creación de un entorno propicio que promueva el efecto derrame de la IED, tanto a los negocios como a las comunidades locales”.

La madre naturaleza, otra víctima

El medioambiente ha sido víctima de la crisis, tanto como el sector social. En Alemania, según el World Wildlife Fund, sólo seis de las 32 medidas de estímulo tuvieron un impacto positivo sobre el medioambiente, y sólo 13% de ellas puede ser considerada sostenible. En Bahrein, el rápido desarrollo del país que le permitirá alcanzar la mayoría de los ODM se ha logrado “a costa del medio ambiente” según los watchers locales. “La pérdida de biodiversidad va en aumento. Por ejemplo, complejos de cemento han reemplazado a las palmeras. Entre 1970 y 2009 más de 90 kilómetros cuadrados fueron ganados al mar, a expensas de bahías, lagunas y playas. Esto ha causado la destrucción de hábitats naturales y la extinción de muchas especies marinas”.

En Tailandia también, la coalición local Social Watch está preocupada con el alto costo ambiental de las políticas que pugnan por la industrialización a cualquier costo. Aún peor es el caso de Bangladesh, que aunque produce una mínima contaminación “es una gran víctima del calentamiento global” y de la crisis financiera. Ambos se originan en los países más ricos y afectan más a las personas que viven en la pobreza y que no tienen arte ni parte en la creación de las mismas.

Tributación y representación

Algunas estrategias para abordar la crisis intentan “exportar el problema” y obtener beneficios a corto plazo haciendo que otros paguen. En la República Checa, el informe de los observadores refleja “un aumento flagrante de la corrupción, mientras que la sociedad está profundamente afectada por la inequidad, la discriminación, el racismo y la segregación. La exportación de armas está en alza, en contradicción con los objetivos de la política exterior oficial de apoyo a los derechos humanos, al desarrollo y la asistencia con ayuda humanitaria”. En Finlandia, los grupos de la sociedad civil observan que la asistencia oficial para el desarrollo frecuentemente apoya las inversiones finlandesas en el exterior, “que a menudo impactan negativamente en la capitalización humana”.

En el extremo receptor de esas malas políticas financieras y de ayuda, el informe Social Watch local observa que un país como “Ghana ha dependido de

la ayuda extranjera y las instituciones financieras internacionales, con el resultado de un desempleo generalizado, enormes déficits de la balanza de pagos y baja producción. La constitución de 1992 y otros instrumentos nacionales, regionales e internacionales proporcionan un fundamento legal y políticas específicas para mejorar el bienestar y la protección de mujeres, niños y niñas. Sin embargo, la escasa inversión estatal en educación, salud, recursos acuáticos y desarrollo rural demuestran la baja prioridad de estas metas. Las posibilidades de realizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 siguen siendo remotas”.

Sobre la base de experiencias similares que incluyen el haber experimentado profundas crisis recientemente, los observadores de Argentina han concluido que “no hay desarrollo sin autonomía y recursos genuinos, como los impositivos. Las sucesivas crisis – políticas y económicas – que han golpeado al país prueban que cuando el modelo de desarrollo priorizó el sector financiero por sobre el productivo el resultado fue nefasto para la gran mayoría de la población. Para lograr un desarrollo sustentable se vuelve imperativo recuperar el control de la economía por parte del Estado, hacerla menos dependiente de la llegada o no de capitales extranjeros, avanzar hacia un sistema tributario más justo y financiar la producción además del consumo”.

La cuestión de los impuestos surge una y otra vez en los informes de las coaliciones nacionales Social Watch. La razón principal para la falta de avance en Perú, “a pesar de un gran crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de un aumento presupuestario del sector público”, es que “no se ha realizado la tan necesaria reforma tributaria ni organizado un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos, o incorporar los temas de género y medio ambiente en la elaboración del presupuesto”.

En el vecino Chile, se “requiere una reforma profunda que modifique un sistema tributario claramente regresivo que descansa prioritariamente en impuestos indirectos que, como es el caso del IVA – la principal fuente de ingresos tributarios –, se cobran indiscriminadamente al conjunto de la población. A los efectos de crear las condiciones apropiadas para financiar una política nacional de desarrollo, esta reforma debería apuntar a retener en el país las ganancias excesivas de las grandes empresas cupríferas”. Sin embargo, la nueva estrategia del gobierno es “facilitar las condiciones para la expansión del capital y la inversión en la explotación de los recursos naturales. Esto incluye incentivos fiscales para las empresas mineras privadas, en un sistema tributario de por sí regresivo”.

También en Kenia, la demanda principal de los observadores locales es que el Gobierno establezca una política fiscal que establezca la economía al

tiempo que cambia “el monto y estructura de los impuestos y de los gastos, así como la distribución de la riqueza. (...) Por otra parte, la financiación del desarrollo debe acompañar la reforma democrática. El proceso debería desafiar la lógica centralizadora del poder, surgiendo de un debate público que apunte a la equidad y la dignidad”. Los observadores kenianos han tenido posteriormente un papel importante en el control de la transparencia e imparcialidad del referéndum constitucional de 2010.

En el extremo positivo, luego de elegir un gobierno orientado a las reformas en Paraguay, los observadores locales comprueban que el incremento de “la recaudación tributaria y los planes de ayuda para el desarrollo significan más recursos para atender las demandas sociales y la inversión en infraestructura, así como los compromisos de la deuda”. En estas circunstancias favorables, centrarse en la extrema pobreza no es suficiente y “los esfuerzos para alcanzar los ODM deben ir acompañados de cambios en el modelo de desarrollo que permitan una redistribución más justa de la riqueza y una mayor protección de los sectores vulnerables”.

Para hacer posible que otros gobiernos cobren sus propios impuestos, bajo una fuerte presión internacional, el gobierno de Suiza ha realizado algunas concesiones y el legendario secreto bancario ha comenzado a tambalearse. No obstante, los observadores suizos informan que la “información respecto a ilícitos fiscales apenas se ha modificado. Si bien el Estado apoya la apertura de las fronteras para fines comerciales, sigue poniendo barreras a la inmigración proveniente de países no europeos. La nota positiva es que el Consejo Federal ha redactado una ley que prevé la congelación y repatriación de activos robados”.

La gran dependencia de las industrias extractivas, incluso cuando se las grava o nacionaliza, también hace vulnerables a los países. En Venezuela, el informe de Social Watch local observa que, “ayudadas por los altos precios del petróleo, las políticas sociales del Gobierno mejoraron los indicadores y los Objetivos de Desarrollo del Milenio formaron parte de la agenda oficial y de la discusión pública. Hoy, la crisis financiera internacional y el aumento de la conflictividad social derivada del debilitamiento de los programas sociales ponen en riesgo los avances anteriores”.

Yemen sufre también una “desmedida dependencia de la exportación de petróleo”. En consecuencia, “la debilidad del resto del sistema productivo han creado una economía incapaz siquiera de responder adecuadamente a las necesidades alimentarias de la población. Es indispensable diversificar la producción agrícola, atendiendo los riesgos medioambientales – sobre todo el agotamiento de las reservas de agua – y proteger y hacer más competitivos los productos nacionales. En lo político, se deben apro-

bar medidas de género más agresivas que posibiliten la integración real de las mujeres en la sociedad”, concluyen los observadores yemeníes.

Las crisis significan oportunidades

La equidad de género es un factor tan importante para alcanzar el desarrollo social que los observadores de varios países dedican sus informes por entero a este tema. En Armenia, se reconoce al gobierno por haber hecho planes y establecido organismos para promover la equidad de género. Sin embargo, la falta de recursos financieros – que ha determinado errores de aplicación – y la falta de concienciación de la población, ha impedido que los planes tengan los resultados esperados”. En Iraq, el informe nacional Social Watch introduce el concepto de “justicia de género”, que “significa mucho más que justicia en los tribunales para los delitos contra mujeres y niñas; abarca el tratamiento equitativo y la participación de la mujer en la negociación de los acuerdos de paz, la planificación y puesta en práctica de operaciones de paz, la creación y administración del nuevo Gobierno (incluyendo agencias e instituciones para atender las necesidades de mujeres y niñas), el proveerles toda la gama de oportunidades educativas, la participación en la revitalización y el crecimiento de la economía, y la promoción de una cultura que fomente los talentos, las capacidades y el bienestar de mujeres y niñas”.

La realidad diaria de Iraq está lejos de esa meta. “La frágil situación política y el débil estado de derecho han transformado la sociedad iraquí en un ambiente inseguro para el desarrollo y la estabilidad. Las mujeres iraquíes enfrentan condiciones difíciles, cargan con más responsabilidades y tienen numerosos desafíos. A diario mujeres y niñas son víctimas de matrimonios forzados y asesinatos por motivos de “honor”, se las coacciona hasta que cometen suicidio, padecen violencia física y sexual, son objeto de explotación sexual y se limita su autonomía y su movilidad”.

Pero incluso en una situación tan grave hay espacio para el optimismo: “Las crisis pueden servir para derribar barreras sociales y estilos patriarcales tradicionales, brindando ventanas de oportunidad para la construcción de una sociedad más justa y equitativa en la que se protejan los derechos de la mujer y en la que la igualdad de género sea la norma en el marco institucional y el social. Es necesario aprovechar estas oportunidades no sólo para promover la rehabilitación social sino también para impulsar y apoyar las nuevas estructuras institucionales, la legislación y su aplicación con el fin de proteger los derechos políticos, económicos, sociales y culturales”.

También se está llevando a cabo un cambio de escenario en Nicaragua, con un cambio demográfico en el que por primera vez en la historia la población infantil dependiente se está reduciendo rápidamente,

mientras que el peso de las personas en edad de bajar está creciendo rápidamente. Los observadores del país han destacado este “bono demográfico”, que ofrece una oportunidad histórica de desarrollo en los próximos 20 años”, siempre que el gobierno establezca “políticas públicas adecuadas para garantizar que los jóvenes entren a los mercados laborales y lo hagan con un buen nivel de educación, capacitación y salud”. Si el Gobierno no invierte en educación ahora, será demasiado tarde.

Los observadores de Chipre también se encuentran entre aquellos que contribuyen visiones y experiencias optimistas. “La isla pasó por todas las etapas que la mayoría de los países en desarrollo atraviesan en la actualidad: régimen colonial, lucha por la independencia, conflictos internos, invasión externa y refugiados. En esta trayectoria histórica, el empoderamiento de la sociedad a través del libre acceso a los bienes y servicios públicos por parte de quienes sufren ha sido clave en el camino hacia la recuperación”. En Chipre, el nuevo Plan Estratégico Nacional para 2011-2015 desafía el statu quo actual en las tendencias de desarrollo. Las principales áreas de interés son la educación y asociaciones entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. La coalición local de Social Watch ve una clara oportunidad para “liderar el cambio en las tendencias de desarrollo, alejándose de las políticas centradas en el mercado y orientándose hacia la justicia social, los derechos humanos y la igualdad”.

En muchos informes de países se mencionan las desigualdades, precisamente, como un importante obstáculo para el logro de los objetivos de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, los observadores comprueban que aun cuando “hasta 2008 hubo un crecimiento económico significativo, éste no se tradujo en una mejoría de situación social: la tasa de desempleo ha aumentado, la concentración de la riqueza ha crecido. La centralización de la cooperación internacional es un obstáculo para la puesta en marcha de proyectos alternativos”.

En Uruguay, a pesar de la crisis, la economía “continuó creciendo y sus índices de pobreza e indigencia mejoraron sensiblemente, gracias a políticas sociales que aprovecharon el buen momento, subordinando las orientaciones macroeconómicas a las necesidades sociales”. Sin embargo, los observadores encuentran que “quedan desafíos a superar, tales como los altos porcentajes de pobreza e indigencia entre los afro-descendientes y la creciente feminización de las jefaturas en los hogares más sumergidos. Para remediar estas situaciones, las inequidades de género y/o de raza deben formar parte integral de las políticas económicas”.

En Surinam, donde se han perseguido objetivos económicos sin considerar las cuestiones de equidad, los observadores locales “efectos adversos en el desarrollo ya que las desigualdades se han

acentuado en una sociedad de por sí vulnerable. Con un índice de pobreza mayor al 60%, el país enfrenta problemas como: vivienda, acceso a la salud, educación e igualdad de género. Para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenibles, el país necesita un equilibrio entre los intereses de los grupos étnicos y los de la nación en su conjunto”.

Las desigualdades pueden estar basadas en la etnia, el género o la geografía. En el caso de México, los observadores informan que, “de acuerdo a la versión oficial, México está en buen camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, si bien se constatan avances en salud, educación y reducción de la pobreza extrema, aún quedan muchos retos por superar, tales como la desigualdad entre regiones del país”. Si bien Ciudad de México cuenta con indicadores de desarrollo comparables a los de algunos países de Europa, hay estados en el sur del país con cifras similares a aquellas de las partes menos desarrolladas del mundo.

Además, en Egipto el informe nacional Social Watch insiste en que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. “El fracaso del país para asegurar que se refleje un mayor crecimiento económico en los niveles de vida de sus ciudadanos representa el desafío principal que el Gobierno deberá enfrentar en los próximos cinco años con el fin de alcanzar los ODM para 2015”.

Sin democracia no hay avance

En El Salvador, que eligió su primer gobierno de izquierda el año pasado, la coalición Social Watch local informa respecto a un fuerte compromiso con el logro de los ODM. “El presidente Funes se comprometió a trabajar en la reducción de la pobreza y el desempleo mediante un plan global de recuperación económica que incluye medidas para estabilizar la economía, inversión en proyectos de infraestructura (incluyendo la cobertura de energía eléctrica en las áreas rurales) y compensación para los trabajadores y sus familias por la pérdida de sus trabajos. Entre las medidas más innovadoras estaba la extensión del sistema de seguridad social para cubrir a los trabajadores domésticos, el 90% de los cuales son mujeres”.

Mientras que la llegada al poder del Frente Nacional de Liberación Farabundo Martí en El Salvador eleva tantas esperanzas, en Eritrea, el país ha estado dirigido durante casi 20 años por un gobierno que surgió de un movimiento de liberación, pero cuyo derecho a gobernar no ha sido confirmado en elecciones libres e imparciales. En consecuencia, según el informe de los observadores en el exilio, “la represión política en el primer decenio del nuevo milenio es más grave que nunca. El Gobierno no cesa de frustrar las aspiraciones económicas y de desarrollo de la población. En vista de las nuevas

sanciones que impuso el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2009, la recuperación económica y el desarrollo social seguirán siendo metas inalcanzables”.

Los observadores de Burma ven como condición necesaria el contar con instituciones democráticas y responsables. “La Constitución de 2008 y las elecciones generales previstas para 2010 sólo perpetuarán el gobierno militar y el estancamiento económico. El desarrollo económico necesita instituciones transparentes, imparciales y responsables, que no pueden coexistir con las flagrantes violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la opresión política”. Antes incluso de que cualquier intento de lucha contra la pobreza sea posible, en su opinión “el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe establecer una Comisión Investigadora para aclarar los crímenes” en el país y se deben establecer instituciones legales y judiciales fuertes.

Un proceso similar ha comenzado en la República Centroafricana donde, gracias a una “pacificación política”, se ha encaminado un proceso para reactivar la economía, mejorar el acceso a los servicios de salud, la seguridad y una mejor gobernanza. Eso ha sido muy lento de acuerdo al informe de Social Watch, y el hecho de que el punto de partida haya sido tan crítico significa que será imposible alcanzar los ODM en el plazo estipulado. Sin embargo, el mero hecho de que haya movimiento y espacio político para que la sociedad civil supervise críticamente e informe sobre el proceso, es en sí mismo una fuente de esperanza.

La capacidad de supervisar e informar es vista como indispensable por los observadores de Malasia. “Si bien los informes del Plan oficial de Malasia dan una imagen prometedora y destacan los logros sin reconocer los fracasos, sigue preocupando la precisión de las estadísticas y las evaluaciones del gobierno”. Dada la mínima supervisión y rendición de cuentas con respecto a la asignación de los fondos de las arcas federal y estatal, “resta por verse si el programa de desarrollo del Gobierno, especialmente para los grupos vulnerables, se ejecutará tal como fue planeado”.

Viniendo de un país que está pasando por una tumultuosa transición social y política, la plataforma nacional Social Watch en Nepal resume la opinión común de toda la red cuando afirma que “los recientes avances en salud, educación y otros sectores no disminuyen la necesidad de un acuerdo social que coloque la responsabilidad primordial para el desarrollo general en manos de la ciudadanía”, y no hay forma en que los múltiples problemas, que van desde el cambio climático al impacto de la crisis, desde inequidades de género a corrupción, migración y construcción de la paz puedan ser ma-

nejados uno por uno en forma aislada. Se necesita un *New Deal* en todos los niveles.

Un programa de justicia

“Si los pobres fueran un banco, ya habrían sido rescatados”, es el comentario sarcástico que hacen muchas personas cuando el dinero adicional necesario para alcanzar los ODM (estimado en unos USD 100 mil millones anuales) se compara con los billones de dólares desembolsados en los dos últimos años en los países más ricos para rescatar bancos quebrados e intentar revertir los efectos de la crisis financiera.

En la práctica, sin embargo, los menos privilegiados en países ricos y pobres por igual no sólo sufren las consecuencias directas de la crisis bajo la forma de pérdida de empleos, ahorros y aún hogares, sino que también se ven obligados a pagar por el rescate y los paquetes de estímulo a través de impuestos más altos y salarios y beneficios sociales reducidos.

En tal contexto, hacer un llamado para implementar “más de lo mismo” no es la solución. Mayor asistencia monetaria y mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo constituyen un imperativo ético, ahora más que nunca. Pero, para confrontar los drásticos impactos sociales y ambientales de las múltiples crisis, es necesario moverse más allá del enfoque de “los mismos negocios de siempre”, y comenzar a trabajar en pos de un programa integral de justicia.

- Justicia climática (reconocer la “deuda climática”, invertir en tecnologías limpias y en la promoción de economías verdes que generen empleos decentes).
- Justicia financiera y fiscal (el sector financiero debe pagar la crisis que generó por medio de un impuesto a las transacciones financieras [FTT, en inglés] o mecanismo similar; se debe reglamentar la especulación y los paraísos fiscales y finalizar o revertir la “carrera a la baja” de las políticas impositivas; se debe permitir que los países en desarrollo impongan controles defensivos de flujos de capital y espacio político).
- Justicia social y de género (cumplir con los ODM, promover la igualdad de género, los servicios sociales básicos universales y la “dignidad para todos”).
- Justicia lisa y llana (jueces y tribunales) que exija el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.

En tiempos de crisis sin precedentes, se requieren líderes con el coraje de ser audaces e innovadores.

La idea de que el que contamina debe pagar por la limpieza de la sociedad que creó debido a su comportamiento irresponsable no está basada en la justicia y el sentido común únicamente, sino que es también una demanda política que los dirigentes no pueden ignorar. Del mismo modo, los ciudadanos de todo el mundo apoyan la idea de que los costos de la crisis financiera deberían ser pagados por los agentes financieros que eran “demasiado grandes para fracasar”, pero de todos modos fracasaron. Es injusto y políticamente inviable esperar que los ciudadanos soporten solos la carga de este fracaso, en forma de impuestos más altos y salarios más bajos y el deterioro de la seguridad social, la educación y los servicios de salud.

En los últimos 20 años, una pequeña cantidad de personas (sólo 10 millones) que representan menos de la mitad del 1% de la humanidad, se han llevado por lo menos USD 1 millón de sus respectivos gobiernos, cada uno, y lo han colocado en la economía subterránea no sujeta a control fiscal. Esta cantidad de más de USD 10 billones de dinero no declarado y libre de impuestos no es un tesoro enterrado oculto en alguna caleta, pero fluye en forma activa a través de las redes electrónicas, especulando contra las monedas nacionales, creando inestabilidad en el comercio mundial legítimo e inflando “burbujas” financieras que a su vez crean, por ejemplo, distorsiones de precio de los productos agrícolas lo que conduce a la crisis alimentaria.

Recuperar el control sobre esas salvajes fuerzas financieras de enorme potencial destructivo para todas las economías es un tema de colaboración internacional. Las Naciones Unidas es el órgano legítimo para negociar y tomar decisiones en torno a la colaboración fiscal; el establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras y la reserva de una porción sustancial de los recursos que genere para el desarrollo; reprimir eficazmente las corrientes financieras ilícitas, incluso aquellas derivadas de la evasión fiscal por “precios de transferencia”; y por último, pero no menos importante, el establecimiento de mecanismos justos de renegociación de la deuda para las deudas públicas y un fortalecimiento de la legitimidad de las moratorias de pagos y moratoria para los países en desarrollo agobiados por una crisis que no crearon.

Hace diez años la Declaración del Milenio prometió “un mundo más pacífico, próspero y justo”. Social Watch se ha comprometido a ayudar a los ciudadanos de todo el mundo a exigir que sus gobiernos rindan cuentas por esta promesa y esperamos que los dirigentes del mundo elaboren el plan de acción para hacer que suceda. ■

◎ INFORME NACIONAL

Justicia financiera y tributaria: una deuda histórica



La experiencia argentina demuestra que no hay desarrollo sin autonomía y recursos genuinos, como los impositivos. Las sucesivas crisis –políticas y económicas– que han golpeado al país prueban que cuando el modelo de desarrollo priorizó el sector financiero por sobre el productivo el resultado fue nefasto para la gran mayoría de la población. Es imperativo que el Estado recupere el control de la economía, la haga menos dependiente de la llegada o no de capitales extranjeros, avance hacia un sistema tributario más justo y financie la producción además del consumo. Para aproximarse al logro de los ODM, la dimensión de género no puede seguir ausente.

FOCO

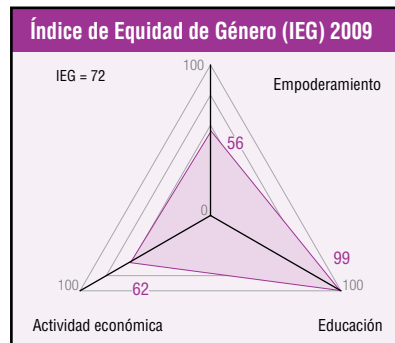
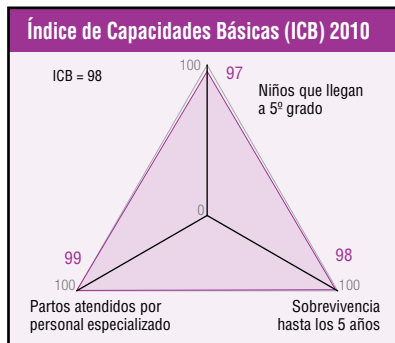
Agostina Chiodi
Rodrigo López

La senda del desarrollo no es una quimera proyectada hacia un futuro; se transita en el presente a través de prácticas democráticas, que en las sociedades modernas se expresan por la oportunidad de los gobiernos de conducir la economía, y no a la inversa. La historia de las últimas décadas, en Argentina, deja en claro que reducir la dependencia del financiamiento externo fortalece la autonomía en el desarrollo de políticas.

La experiencia del país demuestra que el desarrollo requiere autonomía; no puede ser alcanzado si el país depende del financiamiento externo. Así, los impuestos vuelven a ser los “recursos genuinos” sin los cuales no es posible pensar el desarrollo.

En esto, Argentina ha mejorado con relación a su historia (ver sección siguiente): en los últimos años ha logrado aumentar su presión tributaria, que llegó al 30% del PIB (aunque aún está lejos de las experiencias de países desarrollados que rondan el 50%). Sin embargo, se continúa con una estructura tributaria regresiva –proporcionalmente aportan más los que menos tienen– y procíclica –la recaudación acompaña las altas y bajas del consumo. La mayor parte de la recaudación proviene de la imposición indirecta, donde se destaca el impuesto al valor agregado con una tasa del 21% (muy alta en relación a estándares internacionales) y con muy pocas exenciones y tasas diferenciales. Estos impuestos aumentan la inequidad, al presionar más fuertemente en los sectores populares mientras el sector financiero cuenta con numerosas exenciones¹.

Una medida muy importante adoptada por el actual gobierno de Cristina Fernández ha sido la nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones, que habían pasado al sector privado en los años 1990 a través de los sistemas de capitalización. Se recuperó así una fuente de financiamiento legítima para el desarrollo, que evita al Estado endeudarse con el sector privado a tasas de dos dígitos.



Un poco de historia

Antes del golpe de Estado de 1976, la economía argentina había tenido como eje y sustento la economía real. A partir del golpe se abrió un ciclo en el cual el patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones, vigente hasta ese momento, fue reemplazado por la reprimarización de la economía y la valorización financiera. En este sistema, el endeudamiento externo del sector público está en función de la valorización financiera y no de la economía real y de la expansión productiva. Su lógica se basa en que el sector oligopólico se endeuda, valoriza en el mercado financiero interno y fuga al exterior en divisas, provistas por el Estado mediante su propio endeudamiento con el exterior. Para poder implementar este modelo, el terrorismo de Estado desarticuló la clase trabajadora movilizad y desató un genocidio que provocó decenas de miles de muertos y desaparecidos.

Esa modificación de la política económica fue acompañada de cambios en las funciones del Estado. En este proceso era el Estado el que garantizaba que la tasa de interés interna fuera mayor que la internacional, para asegurar la valorización. Ese fue el rol estratégico que cumplió la reforma financiera de 1977, al establecer que el Estado ya no se financiaría a través del Banco Central, sino que sería un tomador de fondos más en el sector financiero². Antes de que el país recuperara la democracia en el año 1983, se estatizó la deuda privada de cientos de empresas y la deuda externa creció, de USD

7.000 millones, a USD 45.000 millones en apenas siete años³.

Este modelo se consolidó en la década de 1990 y Argentina cumplió a rajatabla los mandatos del Consenso de Washington –entre otros, desregulación, liberalización de las tasas de interés, flexibilización laboral, privatizaciones, reducción del gasto público, disciplina fiscal, apertura económica, comercial y financiera. Estas medidas desmembraron el Estado y pauperizaron los sectores populares. La desindustrialización, la terciarización, la desocupación, el endeudamiento externo y la pobreza estructural –56% en 2002, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos– fueron algunas de sus secuelas.

Tres años de recesión, el modelo de endeudamiento y convertibilidad de paridad uno a uno (entre el peso argentino y el dólar estadounidense) colapsó y dio lugar a una fuerte crisis en el año 2001. Esta fecha marcó un quiebre de 30 años en que la economía real estuvo al servicio de la economía financiera y abrió un camino de transición que presentó la posibilidad de revertir esta tendencia.

A partir del año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner implementó una estrategia de alto crecimiento económico que implicó un fuerte impacto en el empleo y mejoró la calidad de vida de la clase trabajadora. Durante los seis años siguientes, el PIB creció a una tasa del 8% anual, manteniendo superávit fiscal y externo y se llevó a cabo un proceso de des-endeudamiento exitoso. Tal desempeño

1 Se encuentra exenta de impuestos la ganancia de personas físicas por renta financiera –esto incluye los depósitos a plazo, así como la compra, venta y dividendos de acciones o títulos públicos.

2 Adrián D'Amore, Entrevista al economista Eduardo Basualdo, “Los sectores dominantes no quieren que siga aumentando la participación de los asalariados”, *Zoom*, 30 de mayo de 2008. Disponible en: <www.rayandolosconfines.com.ar/reflex62_basualdo.html>.

3 María de Monserrat Llairó y Raimundo Siepe, “La evolución del endeudamiento externo argentino y su relación con los organismos financieros internacionales: desde 1976 a la salida del default (febrero de 2005)”, Centro de Investigación de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

fue posible gracias a una serie de políticas que incluyeron: un tipo de cambio competitivo, retenciones a las exportaciones, control de la cuenta capital y estímulos a la producción. No obstante, los caminos del desarrollo requieren enfrentar algunas limitaciones aún vigentes, y definir un patrón de acumulación de capital alternativo a la valorización financiera.

Sistema financiero

Podría decirse que el actual sistema financiero no funciona como tal, desde el momento que no es capaz de financiar la producción. La desregulación arrastrada desde la reforma del 1977, reemplazó el sistema de banca especializada por uno de banca universal, lo que dio una clara ventaja a los bancos comerciales por sobre los de inversión, desarrollo, cooperativos y públicos. De este modo, el crédito se encuentra concentrado en financiamiento del consumo, donde los bancos gozan de beneficios seguros cobrando tasas usurarias, muchas veces disfrazadas en las compras con tarjetas de crédito o de consumo. Aunque existe una alta liquidez bancaria, no se realizan los préstamos que requeriría la inversión productiva. En tal sentido, la ley de entidades financieras de la dictadura afecta el crédito de los pequeños y medianos productores y traba la redistribución; su reforma se torna insoslayable para apuntalar el desarrollo.

Inversión extranjera directa

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina cobró un importante papel en los años 1990 – durante el auge de las privatizaciones. En realidad, se trató más de un “cambio de manos” que de un auténtico proceso de inversiones. Fue en ese período en el que la transnacionalización de la economía argentina aumentó considerablemente, con la venta de muchas empresas nacionales a capitales externos.

Estos capitales controlan actualmente la mayor parte de la industria. Últimamente, la IED se ha concentrado en actividades extractivas – tales como la petrolera y la minera – y en otras actividades ligadas a productos primarios – como la comercialización de la soja –, todas ellas con muy bajo impacto en el empleo. Además, las ganancias son giradas a sus casas matrices en lugar de ser reinvertidas y su actividad degrada el medio ambiente y pone en peligro a la población. En este sentido, se requieren regulaciones mucho más fuertes y un nuevo vínculo con el capital extranjero que permita promover el desarrollo en lugar de limitarse a exportar productos primarios.

Deuda externa y flujo de capitales

Si bien el Gobierno ha reducido la relación deuda-PIB de un 120% a un 40% en menos de un lustro, el camino del endeudamiento debe ser evitado de modo de no hipotecar a las futuras generaciones. El financiamiento del desarrollo requiere anular los mecanismos por los cuales los capitales generados en el país se fugan al exterior, lo que disocia el crecimiento de la acumulación. En parte, el sistema financiero ha contribuido a la inestabilidad de la economía y a sus repetidos colapsos, convalidando las

fugas periódicas de capital⁴. Es necesario, entonces, cambiar de paradigma, dejar atrás la “valorización financiera” y poner las finanzas al servicio de la producción y el desarrollo.

Actualmente, el Gobierno se plantea utilizar parte de las reservas del Banco Central para crear un Fondo que asegure el pago de deuda, mientras algunos sectores de la oposición esperan que esto se haga a partir de un ajuste del gasto público. Si bien los activos – como las reservas – pueden ser utilizados para cancelar pasivos – como las deudas –, hay dos consideraciones importantes a tener en cuenta. Por un lado, primero debe determinarse la legalidad y legitimidad de esos pasivos – las deudas privadas contraídas en la dictadura, por ejemplo, fueron estatizadas y hoy existen fallos judiciales que las han declarado ilegales. Por otro lado, los pagos deben subordinarse a la estrategia de desarrollo.

El Presupuesto Nacional 2010 registra un gasto público en salud de ARS 10.160 millones (unos USD 2.600 millones) y en educación y cultura de algo menos de USD 5.000 millones, mientras que para el pago de intereses de la Deuda Pública la cifra prevista es de unos USD 6.800 millones⁵. Difícilmente se pueda apuntar al desarrollo si los intereses de la deuda implican casi la misma inversión que se prevé para salud, educación y cultura.

En lugar de seguir esperando que la inversión productiva surja de la supuesta confianza de los inversores externos y locales, es el Estado el que debe promover la apertura de nuevas condiciones para los negocios productivos, invirtiendo en las áreas estratégicas para el desarrollo económico. En este sentido, la creación de un Banco de Desarrollo puede ser un buen instrumento para canalizar los recursos provenientes de los aportes jubilatorios, como muestra la experiencia exitosa del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil⁶.

A su vez, cabe consignar la importancia de la puesta en funcionamiento del Banco del Sur⁷ para fomentar el desarrollo y la integración regional de América Latina, abriendo nuevas alternativas de financiamiento basadas en conceptos de igualdad, equidad y justicia social.

En la Argentina de hoy, como resultado de una economía primarizada, altamente extranjerizada y

concentrada, la moneda que opera como reserva de valor y sobre la cual se organizan las relaciones económicas es el dólar estadounidense. Se debería tener como prioridad modificar el carácter de la estructura productiva, la nacionalidad de los principales capitales, el grado de concentración de los medios de producción y, en ese marco, desmontar el dispositivo neoliberal que presenta actualmente el diseño del Banco Central, discutir su autonomía, y modificar su Carta Orgánica. Un organismo gubernamental que define la política cambiaria, monetaria y financiera no puede ser ajeno a la voluntad popular, ni tener como único objetivo la preservación del valor de la moneda, sin considerar las condiciones estructurales que definen dicho valor.

Reflexiones finales

Los factores analizados están estrechamente ligados a las causas de la pobreza y la deficiencia de los índices de desarrollo humano, así como a la falta de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No hay que perder de vista, por otra parte, que la equidad de género constituye una condición fundamental para consolidar los procesos de desarrollo y democratización. Potenciar el papel económico de la mujer, proporcionándole acceso a oportunidades económicas y educacionales, así como la autonomía necesaria para aprovechar esas oportunidades, sería un avance hacia la superación de varios de los ODM. No se trata sólo de promover la equidad de género, sino también de mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil, y avanzar hacia la erradicación de la pobreza.

A pesar de estas consideraciones, los derechos humanos de las argentinas todavía no son vistos como un objetivo de desarrollo, ni existe aún un programa integral orientado a tomar en cuenta la dimensión de género. Para que se haga efectivo el Derecho Humano de desarrollo de los Pueblos, que se basa en los principios de la Carta de Naciones Unidas y fuera proclamado por la Declaración de la Asamblea General de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo, es fundamental que la sociedad civil exija la implementación de acciones políticas y estrategias urgentes y concretas, que aseguren condiciones de vida dignas y permitan la realización de todas las personas en un marco de desarrollo sustentable. ■

4 Como por ejemplo en las hiperinflaciones de 1989-1990, en la crisis del 2001 y en el actual jaqueo a la cuenta financiera, desde inicio de la crisis internacional de 2007.

5 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, datos oficiales del Presupuesto 2010. Disponible en: <www.mecon.gov.ar>.

6 Este Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) fue creado para impulsar la industrialización sustitutiva de importaciones y llegó a ser el responsable de la formulación y ejecución de la política industrial de Brasil. Aun en la etapa liberal de los años 1990 el BNDES representaba el 25% del crédito total ofrecido por el sistema bancario. En 2002, este porcentaje alcanzó uno de sus niveles más altos (33%), cumpliendo perfectamente su papel “anticíclico”. Fuente: Claudio Golonbek y Emiliano Sevilla, “Un estudio de caso sobre Banca de Desarrollo y Agencias de Fomento”. Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, Documento de Trabajo Nº 20, mayo de 2008. Disponible en: <www.cefid-ar.org.ar>.

7 Creado en 2009 por iniciativa del presidente venezolano Hugo Chávez, está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza primaria universal para el 2015, constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo.

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

- Meta 1.A** Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día
- Meta 1.B** Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes
- Meta 1.C** Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

- Meta 2.A** Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

- Meta 3.A** Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

- Meta 4.A** Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años

OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA

- Meta 5.A** Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015
- Meta 5.B** Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES

- Meta 6.A** Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015
- Meta 6.B** Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten
- Meta 6.C** Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

- Meta 7.A** Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente
- Meta 7.B** Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010
- Meta 7.C** Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
- Meta 7.D** Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

- Meta 8.A** Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo
- Meta 8.B** Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio
- Meta 8.C** Lidar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo
- Meta 8.D** En cooperación con las compañías farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo
- Meta 8.E** En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones

Fuente: <www.un.org/spanish/millenniumgoals/>

ÍNDICE DE CAPACIDADES BÁSICAS

A DIEZ AÑOS DE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO

El progreso de los indicadores sociales se ha enlentecido

El Índice de Capacidades Básicas (ICB) 2010, desarrollado por Social Watch, muestra que la reducción de la pobreza se ha desacelerado en las últimas dos décadas. La evolución del ICB desde 2000, cuando se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), indica que el progreso se está desacelerando en lugar de acelerarse, y que los esfuerzos de la comunidad internacional no se traducen en progresos más rápidos en los indicadores sociales. El progreso social no sigue automáticamente al crecimiento económico y son necesarios mejores indicadores (no monetarios) para monitorear con mayor precisión la evolución de la pobreza en el mundo.

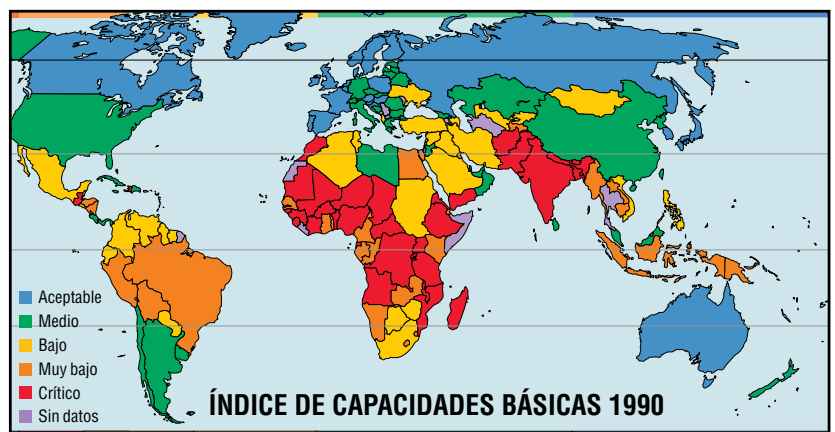
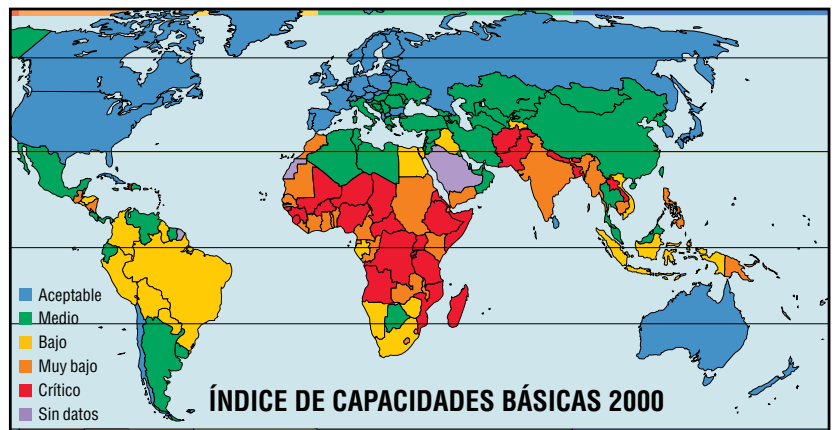
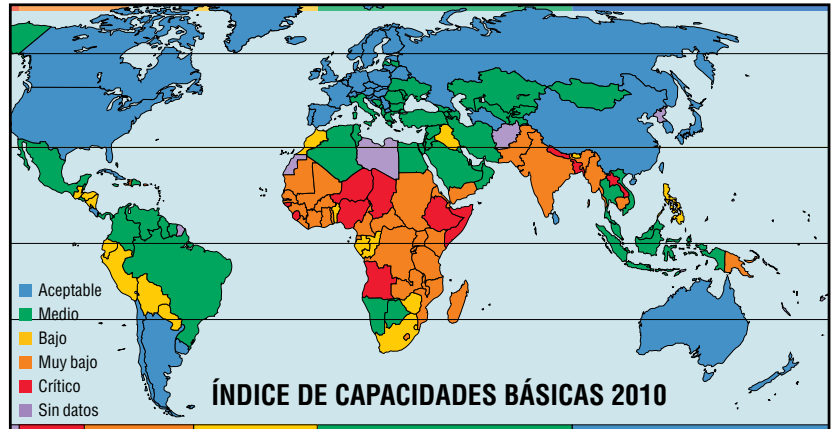
En su informe de febrero de 2010 *Mantener la promesa*, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, afirma que los ODM "son las metas del mundo, cuantificadas y medibles en el tiempo para enfrentar la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades, y para promover la igualdad de género, la educación y la sostenibilidad del medio ambiente. También son una expresión de los derechos humanos básicos: los derechos de todos a la buena salud, la educación y la vivienda".

Sin embargo, si bien los objetivos son "cuantificables", no son fáciles de medir. La ONU ha desarrollado un conjunto de 38 indicadores en cada una de las metas específicas correspondientes a cada objetivo, pero faltan datos para la mayoría de los países. En la meta más importante, que es reducir la proporción de la población que vive con menos de un dólar al día, los datos de 2005 o más recientes sólo se encuentran disponibles para 67 países.

La foto actual a través del ICB

El ICB fue diseñado por Social Watch como una forma alternativa de monitorear el estado de la pobreza en el mundo. La mayor parte de las mediciones disponibles sobre la pobreza tienen como base el supuesto de que ésta es un fenómeno monetario y miden, por ejemplo, cuántas personas viven con un ingreso inferior a un dólar por día. El ICB, así como otras formas alternativas (no monetarias) de medir la pobreza, toma en cuenta la capacidad de acceso a una serie de servicios indispensables para la supervivencia y dignidad humana. Los indicadores que componen el ICB son los más básicos de los que componen los ODM.

El ICB es el promedio de tres indicadores: 1) mortalidad de niños menores de cinco años, 2) salud reproductiva o materno-infantil y 3) educación (a través de un valor combinado de matrícula en educación primaria y tasa de supervivencia hasta quinto grado). Todos los indicadores están expresados en porcentajes en un rango de variación entre 0 y 100. La mortalidad infantil, usualmente expresada por el número de muertes cada 1.000 nacidos vivos, se expresa como 100 menos ese valor. Así, por ejemplo, un valor de 20 muertes por 1.000 se convierte en 2%, y, cuando se resta a 100, determina un valor de 98 para el indicador. De este modo, el valor máximo teórico en mortalidad infantil es 100, lo que significaría que todos los niños nacidos vivos llegan a cumplir los cinco años. Salud reproductiva adquiere su valor máximo (100) cuando todas las mujeres en condiciones de dar a luz son atendidas por personal especializado.



EVOLUCIÓN DEL ICB POR PAÍS											
País	ICB 2000	Evolución del ICB	ICB 2010	País	ICB 2000	Evolución del ICB	ICB 2010	País	ICB 2000	Evolución del ICB	ICB 2010
Afganistán	45			Estados Unidos	97		97	Mongolia	94	→	96
Albania	99	←	97	Estonia	99		99	Montenegro	97		97
Alemania	99+		99	Etiopía	48	→	53	Mozambique	62	→	71
Angola	57	→	60	Federación Rusa	99		98	Namibia	86	→	90
Arabia Saudita			92	Filipinas	79	→	81	Nepal	54	→	58
Argelia	94	→	96	Finlandia	99+		99	Nicaragua	76	→	81
Argentina	97	→	98	Francia	99		99	Níger	48	→	59
Armenia	95		94	Gabón	84			Nigeria	64	←	61
Australia	99		99	Gambia	76	←	72	Noruega	99		99
Austria	99		99	Georgia	94	→	97	Nueva Zelanda	98	→	99+
Azerbaiyán	90	→	94	Ghana	66	→	77	Omán	94		94
Bahamas	94	→	97	Grecia	94	→	99	Países Bajos	99+		99
Bahrein	95		95	Guatemala	69	→	88	Pakistán	55	→	65
Bangladesh	61		61	Guinea	54	→	67	Panamá	94		94
Belarús	98		99	Guinea Bissau	55	→	60	Paraguay	81	→	89
Bélgica	99+	←	99	Guinea Ecuatorial	66	→	68	Perú	82	→	88
Belice	91	→	96	Guyana	85	→	91	Polonia	99		99
Benín	78	→	85	Haití	63	→	67	Portugal	98	→	99
Bhután	63	→	85	Honduras	80	→	84	Qatar	96	←	94
Birmania	67	→	77	Hungría	97		98	Reino Unido	99		99
Bolivia	82		83	India	67	→	73	República Centroafricana	63	→	65
Bosnia y Herzegovina	97		97	Indonesia	85	→	90	República Checa	99		98
Botswana	91		90	Irán, Rep. Islámica	93	→	95	República Dominicana	90		90
Brasil	88	→	96	Iraq	81	→	88	Rumania	97		97
Bulgaria	98		98	Irlanda	98		99	Rwanda	57	→	79
Burkina Faso	55	→	69	Islandia	99+		99	Senegal	70	→	71
Burundi	53	→	66	Israel	96		96	Serbia	97	→	98
Cabo Verde	93	←	87	Italia	95		99	Sierra Leona	55	→	61
Camboya	65	→	70	Jamaica	94	←	93	Singapur	98		98
Camerún	75		75	Japón	99+		99+	Siria, República Árabe	92	→	96
Canadá	99		99+	Jordania	97		97	Somalia	58		57
Chad	50	→	54	Kazajstán	95	→	97	Sri Lanka	98		99
Chile	98		98	Kenia	65	→	71	Sudáfrica	85		86
China	97	→	99	Kirguistán	95		95	Sudán	79	←	77
Chipre	95		96	Kiribati	88	←	82	Suecia	99		99
Colombia	87	→	94	Kuwait	94		94	Suiza	98		98
Comoros	74			Lao RDP	59	→	63	Suriname	91		91
Congo, Rep.	73	→	80	Latvia	99	←	97	Swazilandia	77	→	81
Congo, Rep. Dem.	58	→	78	Lesotho	74	→	78	Tailandia	96		96
Corea, Rep.	99+		99	Libano	94	←	92	Tanzania	63	→	75
Corea, Rep. Dem.	92			Liberia	70	←	67	Tayikistán	86	→	93
Costa Rica	96	→	97	Libia	96			Togo	71	→	74
Cote d'Ivoire	73	→	74	Lituania	99		98	Trinidad y Tobago	96		96
Cuba	98		99	Luxemburgo	99		99	Túnez	94	→	97
Dinamarca	99		99	Madagascar	61	→	76	Turkmenistán	91	→	98
Djibouti	72	→	76	Malasia	96	→	97	Turquía	90	→	95
Dominica	96	←	92	Malawi	72	←	70	Ucrania	97		97
Ecuador	95	←	88	Maldivas	88	→	92	Uruguay	97	→	98
Egipto	83	→	91	Malí	62	→	69	Uzbekistán	96	→	97
El Salvador	88	→	91	Malta	95	→	97	Venezuela	94	←	91
Emiratos Árabes Unidos	92	→	95	Marruecos	78	→	88	Vietnam	86	→	93
Eritrea	56	→	76	Mauricio	98		98	Zambia	68	→	75
Eslovaquia	98		98	Mauritania	69	→	71	Zimbabwe	82	→	87
Eslovenia	99		98	México	92	→	96				
España	99		99	Moldova	91	→	96				

Referencias:

← Retroceso severo

← Retroceso

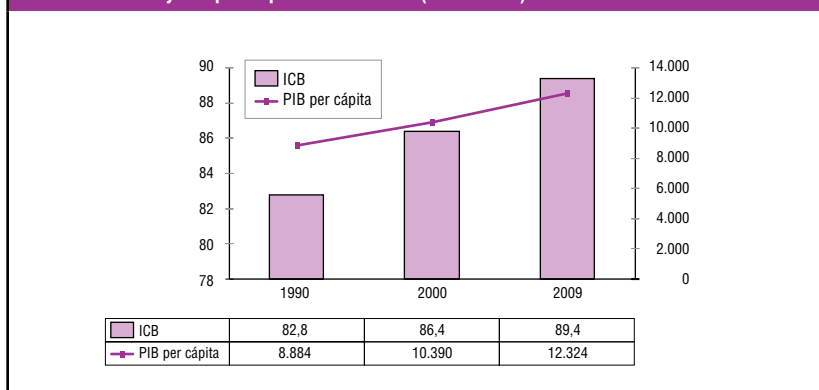
|| Estancamiento

→ Avance leve

→ Avance significativo

Nota: los valores en itálica son estimaciones.

GRÁFICO 1. ICB y PIB per cápita en el mundo (1990-2009)



De igual modo, educación alcanza un máximo de 100 cuando todos los niños en edad escolar están matriculados y alcanzan cinco años de escolarización. Estos tres indicadores son luego promediados, de tal modo que el valor total del índice varía entre 0% y 100% (ver Evolución del ICB por país en página anterior).

En términos generales, los números muestran que desde 1990 el mundo ha hecho progresos en el esfuerzo por reducir la pobreza. En las últimas dos décadas han mejorado el ICB y el producto bruto per cápita a nivel mundial. El Gráfico 1 promedia el valor total del ICB y del ingreso per cápita mundiales en dólares PPP (de paridad del poder adquisitivo) para tres puntos en el tiempo (1990, 2000 y 2009).

Mientras que el crecimiento del ingreso per cápita se aceleró y pasó de 17% entre 1990 y 2000 a 19% entre 2000 y 2009, el crecimiento del ICB se desaceleró y pasó de 4% en la última década del siglo XX a 3% en los primeros años de este siglo. Esto indica que la Declaración del Milenio y los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar los objetivos incluidos en ella no se tradujeron en progresos más rápidos en los indicadores sociales. Por el contrario, los datos agregados del Gráfico 1 coinciden con los hallazgos de investigaciones recientes, donde también se reporta una desaceleración en el progreso de los indicadores desde el año 2000¹.

Este comportamiento del ICB a nivel agregado presenta variaciones importantes en la desagregación por regiones. Estas unidades de agregación cobran sentido por al menos dos motivos. Por un lado existen patrones de difusión geográfica en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al abatimiento de la pobreza y las necesidades básicas captadas por el ICB y otras formas de medir pobreza absoluta. Por otro, los países que integran las regiones presentan claros patrones de interdependencia que inducen a un comportamiento similar en el desempeño de algunos indicadores socioeconómicos.

En la elaboración de la Gráfica 2 se estimaron ICB regionales ponderando los ICB nacionales por la población. La gráfica muestra que todas las regiones incrementaron los valores del ICB, algunas de ellas sólo

marginalmente. Por ejemplo, los países desarrollados presentan variaciones o incrementos muy pequeños porque sus valores están muy cercanos al 100% y ya no pueden lograr mejoras. Estos son los países con mayor desarrollo humano, equidad y menor pobreza, así como también mayores niveles en las Capacidades Básicas de la gente.

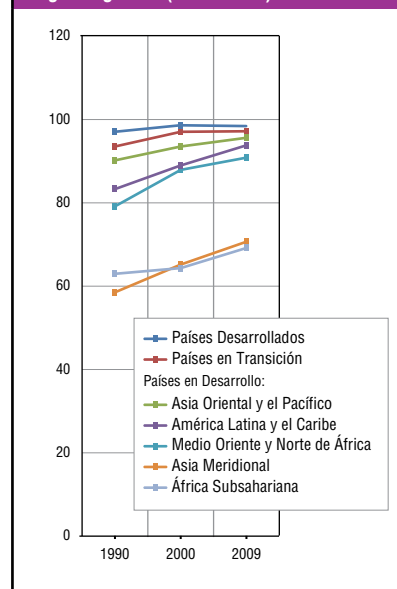
En segundo lugar, los países en transición, América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África muestran progresos en el período 1990-2009. Sin embargo, los mayores avances se registraron entre 1990 y 2000, mientras que su evolución entre 2000 y 2009 es relativamente menor. Nuevamente, los datos muestran una desaceleración en la evolución del ICB desde el año 2000 en vez de un avance a partir del establecimiento de los ODM.

En tercer lugar, Asia Meridional avanza en su ICB al mismo nivel antes y después del año 2000, mientras que África Subsahariana es la única región que progresa más rápido a partir del año 2000 que en la década anterior, en la cual el continente prácticamente no avanzó. Ambos parten de niveles muy bajos y necesitan acelerar aún más si quieren llegar a niveles medianamente aceptables en la próxima década. Asia Meridional progresa a una velocidad mayor que África Subsahariana. Esta región consta de un pequeño grupo de países y su promedio está fuertemente influenciado por India, que aumentó 5 puntos en el ICB, entre 1990 y 2000, y otros 5 puntos desde entonces. El enorme y heterogéneo grupo de África Subsahariana fue el que tuvo el valor más bajo en el ICB 2010.

Entre los países en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico, el progreso del ICB es muy lento, debido al gran peso de China, que avanza muy lentamente en sus valores de ICB relativamente elevados. Esto contrasta notoriamente con el comportamiento de China en relación al ingreso per cápita o la población con ingresos por debajo de un dólar diario. En ambos indicadores China presenta enormes progresos en las últimas dos décadas, mientras que los avances en sus indicadores sociales básicos se registraron antes de la década de 1990.

La Tabla 1 muestra una forma alternativa de observar la evolución reciente en base al nivel determinado por los valores establecidos en el ICB (Crítico, Muy bajo, Bajo, Medio y Aceptable). En dos décadas el grupo de los países con valores medio y aceptable y el de los que tienen niveles bajo, muy bajo y crítico invierten sus posi-

GRÁFICO 2. Evolución del ICB según regiones (1990-2009)



ciones, pasando los primeros de 40% a 61% del total de países para los que se puede calcular el ICB y los segundos de 60% a 39%. En ambos casos, la gran reducción en el grupo con peores situaciones y el crecimiento del número de países en niveles relativamente mejores se da antes del año 2000 y los ritmos se desaceleran en el nuevo milenio.

Algunos casos en la evolución reciente

Además de variaciones importantes entre regiones, ha habido variaciones entre países dentro de las regiones. Europa y América del Norte son relativamente homogéneas, con niveles bajos de variación entre los países integrantes de cada una de estas zonas geográficas. Estos casos, además, no verifican avances sustantivos, dado que representan a los países con niveles satisfactorios en el índice. En cambio, otras regiones presentan un mayor nivel de variación en la evolución de las últimas dos décadas (ver Gráfico 2). Todos los niveles del mapa general presentado en el la tabla de evolución presentan casos con avances y otros con retrocesos.

En el grupo de los países con nivel de ICB aceptable, Albania tuvo el mayor progreso en la década de 1990, pero luego verificó el peor retroceso en la siguiente década. Este valor de retroceso es relativamente leve, pero indica una falta de continuidad en el esfuerzo por

TABLA 1. Evolución del ICB según niveles (en número de países).

	1990	2000	2010
Crítico	42	35	22
Muy bajo	18	17	22
Bajo	34	19	19
Medio	29	43	40
Aceptable	33	50	58
Total	156	164	161

1 Fukuda-Parr y Greenstein, "How should MDG implementation be measured: faster progress or meeting targets?", Working paper 63. International Policy Centre for Inclusive Growth, mayo 2010.

mejorar el desempeño en los indicadores básicos que cubre el ICB. En el grupo de países con valores intermedios, vale la pena resaltar los dos extremos del mismo. Por un lado, no sorprende el desarrollo positivo verificado por Brasil, donde tasas de crecimiento muy altas y un compromiso estable de la elite política han facilitado el abatimiento de las condiciones de pobreza de la población durante las últimas dos décadas. Por otro lado, como lo muestran los registros de numerosos países con alta renta petrolera en África Subsahariana, los beneficios de este recurso natural no son mecánicamente transferidos a formas de bienestar social, aun en los casos en que la evolución de la economía presenta indicadores saludables. Como es evidente, no es suficiente proveer fondos y servicios orientados al abatimiento de la pobreza, se requiere de la acción colectiva de los agentes que lideran al sistema político. Sin este compromiso no existe progreso social.

Por último – pero no menos importante –, otros casos en otros niveles de ICB también merecen ser destacados. En el nivel bajo, Guatemala y Bhutan han dado grandes pasos. En el nivel muy bajo, hay países que están saliendo de conflictos étnicos y guerras civiles durante las décadas pasadas, como Rwanda, que verifica una mejora notoria durante el período 2000-2009, mientras Sudán persiste en una caída sistemática en los valores del ICB para los dos periodos en estudio. Por otra parte, en el nivel crítico, algunos países como Burkina Faso, Burundi o Guinea han evolucionado bien mientras otros, como Nigeria, no lo han hecho.

Mirando hacia el futuro

Dada la evolución reciente en los valores del ICB, la pobreza medida a través del acceso a un pool de servicios básicos para la supervivencia humana va a seguir disminuyendo a través del tiempo, pero la velocidad de reducción de la pobreza no está automáticamente determinada por la economía. Incluso a tasas de crecimiento económico moderadamente bajas, los indicadores del ICB tienden a la baja, al igual que lo que ha ocurrido con otras mediciones de pobreza no monetaria, como las Necesidades Básicas Insatisfechas, medidas en buena parte de América Latina durante los años 1980. Si los ICB son en el largo plazo una ola por la cual progresiva-

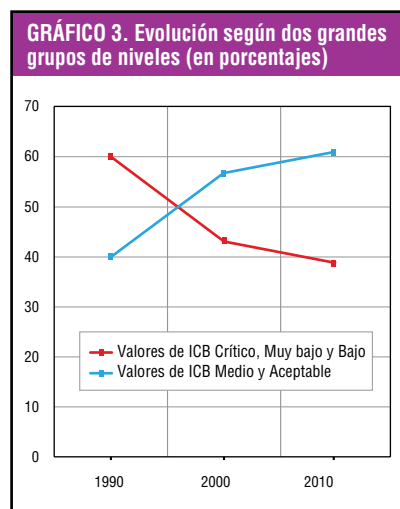
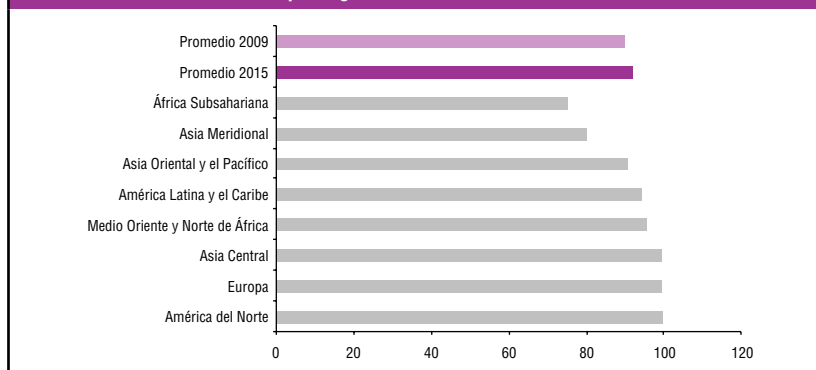


GRÁFICO 4. Evolución del ICB por regiones hacia 2015



mente un menor número de países se va a encontrar en el nivel crítico y un mayor número se va a localizar en valores superiores a 90% en forma estable, es preciso que aquellos dedicados a observar la evolución de los ODM caminen hacia la exploración de indicadores que provean mayor nivel de variación o desagregación, particularmente en los niveles con mayor ICB.

Para hacer posible este monitoreo, es necesario un compromiso de la comunidad internacional en la generación de estadísticas más ajustadas, con una apropiada discriminación de género, regional y étnica. Estos indicadores se hallan actualmente disponibles para buena parte de los países desarrollados, pero sabemos muy poco sobre la forma en que se comportan en el resto del mundo. En los próximos años, muchos

países saltarán hacia el grupo con valores medianos y aceptables en el ICB y habrá, progresivamente, un mayor número de países con valores estancados porque el ICB no puede superar el 100%. El patrón de crecimiento sostenido en los valores del ICB para todo el mundo, independientemente de su relativa desaceleración a partir de 2000, indica que un número cada vez más importante de países debe ser monitoreado sobre la base de indicadores que capten con mayor precisión la evolución de la pobreza no monetaria en el mundo.

La proyección lineal en el Gráfico 4, basada en los datos para los períodos 1990-2000 y 2000-2009, también muestran que si se mantiene la actual tendencia en la evolución del ICB, grandes regiones del mundo estarán todavía lejos de alcanzar niveles aceptables en 2015. ■

NOTA TÉCNICA:

I. Los Indicadores del ICB:

1. Educación: a) Porcentaje de niños que alcanza quinto año de escolaridad en educación primaria; b) tasa neta de matriculación en educación primaria. El indicador Educación se compone del promedio de estos dos valores (a y b).
2. Mortalidad de niños menores de cinco años. El valor de este indicador está representado como $I1=(100-M)$, como la tasa de supervivencia hasta cinco años de edad, donde M es la tasa de muerte en los primeros cinco años de vida cada 1.000 nacimientos.
3. Porcentaje de partos asistidos por personal profesional de la salud.

II. El ICB ha sido calculado para tres puntos en el tiempo, con distintas fuentes de información de libre acceso (ver la lista completa de fuentes en <www.socialwatch.org>). A los efectos de completar datos para 1990, 2000 y 2009, el equipo de investigación de Social Watch elaboró un sistema de medidas aproximadas (o proxies) que maximiza la información disponible. Para 1990, se consideraron todos los datos disponibles en un rango de cinco años, tomando como base 1990 y asumiendo +/- 2 años. En los casos en que no existe información disponible con anterioridad a 1990, se toma el mismo rango de cinco años, hasta 1995 inclusive.

Para el año 2000 tomamos un rango de cinco años, dejando 2000 como año base y un criterio de +/- 2 años. Finalmente, para 2009 se aplicó el criterio del último dato disponible desde 2005¹.

III. Hay un alto grado de correlación entre los valores de los tres indicadores, y los valores de cada indicador también están correlacionados con sus valores en diferentes puntos del tiempo; entonces, en aquellos casos en que no contamos con información sobre el porcentaje de partos asistidos por personal médico, imputamos valores basados en los otros dos indicadores del índice (educación y mortalidad infantil).

IV. A los efectos de tipificar evolución, el equipo de Social Watch aplicó los siguientes puntos de corte: menos de un desvío estándar negativo del promedio de evolución (Retracción severa); entre un desvío estándar negativo del promedio y -1% de variación en la tasa (Retracción leve); entre -1% y 1% de variación en la tasa (Estancamiento); entre 1% de variación en la tasa y un desvío estándar sobre el promedio de variación (Avance leve); y más de un desvío estándar sobre el promedio de variación (Avance significativo). ■

¹ Los valores de ICB mostrados en los "diamantes" que aparecen en los informes nacionales corresponden a los valores del ICB 2010.

La crisis económica: hora de un nuevo acuerdo social

Edward Oyugi
Social Development Network, Nairobi, Kenia

El dinamismo y la riqueza global que el sistema capitalista ha logrado producir en los últimos 200 años se han conseguido a un costo elevado. La notable flexibilidad del sistema lo ha ayudado a superar numerosos desafíos internos y externos, pero a un costo importante para los grupos de interés humanos y, cada vez más, para el medio ambiente.

Al debilitarse su prosperidad histórica, tanto las víctimas como los beneficiarios del capitalismo se enfrentan a la difícil perspectiva de abordar el deterioro de la productividad, la falta de equidad, la pobreza generalizada y la agudización de la ineficiencia distributiva. Son cada vez más las personas que reconocen que la crisis financiera mundial de nuestros días constituye un mero síntoma de un problema más sistémico. La "economía real" está en crisis; una crisis del capitalismo que padece no ya de dolencias efímeras, sino de una enfermedad en fase terminal¹.

Las políticas neoliberales, que persiguen los intereses corporativos impulsados por los diferentes sectores, son las que han dado lugar a esta crisis. Sin embargo, no es del todo cierto que el neoliberalismo signifique la desregulación de los mercados; se trata más bien de la regulación no declarada del mercado a favor de los intereses de los dueños del capital, cosa que el tema de las patentes deja en evidencia. Desde tiempos inmemoriales, la "propiedad intelectual" no estaba regulada; los hombres y las mujeres que inventaron la rueda y las técnicas agrícolas no obtuvieron ganancias con sus inventos, a pesar de que todas las generaciones posteriores los han utilizado. Es sólo bajo el capitalismo que las corporaciones se apresuran a patentar no sólo sus propios descubrimientos e invenciones sino también los de otras personas. Así, por ejemplo, las compañías farmacéuticas obtienen ganancias escandalosas al vender medicamentos que salvan vidas a precios que condenan a la muerte a la mayoría de los pacientes que los necesitan.

De modo que, cuando se habla de la regulación o falta de ella, es importante darse cuenta de

que ambas modalidades podrán favorecer a los intereses hegemónicos en el marco de una economía política específica. Si se analiza más de cerca lo que aparenta ser una regulación leve, se podrá ver que en realidad se trata de una regulación sutil que favorece los intereses del segmento gobernante de la sociedad.

El sistema se basa en la interacción no planificada de miles de corporaciones multinacionales y de los principales gobiernos del norte. Se asemeja a un sistema de tránsito sin demarcación de carriles, señalización, semáforos, límite de velocidad y ni siquiera un código claro que establezca que todos deben conducir por el mismo lado de la calle. Debido a ello, será sin duda muy difícil evitar que el derrumbe del sector financiero se generalice y se convierta en algo mucho más serio en los próximos meses o años. Cuanto antes reconozcamos que sólo una minoría se beneficia del capitalismo, antes podremos generar una solución democrática para la mayoría. Si la causa de estas miserias sin fin es sistémica, la solución también debe serlo.

Los desafíos de la protección social

La crisis actual ha afectado a muchos sectores de la sociedad, aunque de diferentes maneras y según la ubicación geográfica, la situación socioeconómica y la fuente primaria de medios de vida. Los países que cuentan con movimientos sociales sólidos y una notable tradición en procesar los reclamos sociales a favor de los más vulnerables (tales como Indonesia, Filipinas y algunos en América Latina) han construido sobre la base de las dinámicas de reforma en curso con extraordinario éxito.

No hay duda que uno de los problemas más graves que ha causado la crisis económica es el desempleo prolongado que parece haberse instalado. Por lo general, el ritmo de la recuperación económica va muy a la zaga del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, existe una intervención prometedora que combina la creación de puestos de trabajo con la mejora de las opciones de medios de vida. Si se elabora teniendo en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables, una política de protección social de este tipo puede favorecer tanto al desarrollo como a la equidad de género. Para ello será necesario establecer un marco político de seguridad social e instrumentos que promuevan el desarrollo social equitativo para que exista la posibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La protección social puede desempeñar un papel integral en la mitigación del impacto debili-

tante de la pobreza, sobre todo en una crisis como la actual. En ese sentido, constituye una importante política contracíclica. Sin embargo, las respuestas de la protección social a la crisis capitalista neoliberal en curso han sido, como mínimo, imperceptibles además de caóticas. Ciertos países han elegido una amplia gama de medidas de protección social y algunos han puesto en práctica su intención de cumplir con los compromisos asumidos antes de la crisis. Entre los países en desarrollo, Kenia y Uganda están en esta categoría. Otros, como Ghana, han hecho intentos aún mayores por exceder el nivel de cobertura anterior a la crisis, incluso a riesgo de aumentar el déficit fiscal ya casi insostenible. Sin embargo, una gran cantidad de países han pospuesto sus medidas de protección social y han optado en su lugar por abordar los desafíos de la estabilización macroeconómica. Por ejemplo, Nigeria ha preferido poner en marcha un régimen de estímulo fiscal y al mismo tiempo regular el déficit que es cada vez mayor. Ello sólo será posible mediante la cuidadosa reducción del gasto en el sector social que podría, de otro modo, dar lugar a conmociones microeconómicas.

Las necesidades humanas al frente

En algún momento los pueblos del mundo se darán cuenta de que la causa de tanta inestabilidad económica y miseria entre la mayoría de los integrantes de nuestras sociedades es el capitalismo en sí, y no este o aquel individuo o partido deshonesto o corrupto. No obstante, son muchos quienes aún se aferran, con poco sentido realista, a las ilusiones acerca de la eficacia de las diversas formas de paquetes de estímulo enfocadas a salvar al capitalismo de su propia lógica autodestructiva. En cierto modo no podría ser de otra manera, dado el desequilibrio de las fuerzas sociales que se enfrentan en aras de una redefinición democrática del futuro de la humanidad. Si bien crece la presión ejercida por las fuerzas populares a favor del cambio, aún no cuentan con la fuerza suficiente para lograrlo.

No es posible reformar o reparar el sistema capitalista mediante medidas de seguridad social efímeras que dejan intacto el meollo de su lógica societal. Únicamente la transformación total de la sociedad, organizada en torno a una nueva lógica, puede dar como resultado un mundo en el que la prioridad sea cubrir las necesidades de los seres humanos y no las ganancias empresariales. ■

¹ Por más información sobre este tema, véase F. William Engdahl, *Financial Tsunami: The End of the World as We Knew It* ("El maremoto financiero: el fin del mundo tal como lo conocimos"), Global Research, 30 de septiembre de 2008.

El género en tiempos de crisis: se necesita un nuevo paradigma de desarrollo

Grupos de trabajo de Género de Social Watch¹

En 1979, muchos de los gobiernos del mundo asumieron compromisos jurídicos con los derechos de la mujer al firmar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés). Dieciséis años después, en 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adoptó un exhaustivo plan de acción para lograr la igualdad de género: la Plataforma para la Acción de Beijing. En septiembre de 2010, los líderes del mundo se reunirán en Nueva York en la Cumbre sobre los ODM para evaluar los avances hacia esos objetivos, entre los cuales figura la reducción de la pobreza y la desigualdad, y dialogar sobre cómo acelerar esos avances frente a las múltiples crisis superpuestas del clima, los alimentos, la energía, las finanzas y la economía.

A pesar de algunos avances, los compromisos asumidos en Beijing y la CEDAW están muy lejos de ser aplicados plenamente, y la igualdad de género no siempre es un componente de los programas de desarrollo económico y social sustentable. Desde cualquier perspectiva, incluido el Índice de Equidad de Género (IEG) de Social Watch, se necesitan progresos urgentes en esta área porque los gobiernos suscriben los instrumentos internacionales con prontitud pero son lentos en garantizar su aplicación.

La pobreza en aumento y el progreso irregular hacia los ODM – todos los cuales tienen dimensiones de género – se deben no sólo a impactos y crisis externas sino también a desequilibrios estructurales subyacentes. En épocas de crisis, son las mujeres quienes llevan la peor parte de la disminución de fondos para el desarrollo, pues deben encontrar formas de alimentar y cuidar a sus hijos y otros dependientes cuando el hogar cuenta con menos ingresos, y deben asumir más tareas no remuneradas cuando se recortan los servicios sociales. Las personas pobres – y las mujeres están entre los más pobres de los pobres – no tienen reservas para afrontar las crisis. Sin embargo, los mismos países que no encuentran dinero para el desarrollo movilizaron miles de millones de dólares para rescatar bancos y empresas.

Crisis como la de los alimentos, los combustibles y las finanzas no son neutrales frente al género. Exacerban las desigualdades existentes y ponen de relieve los efectos negativos sobre las

mujeres y sobre las economías que dependen de ellas. Sin embargo, pocas de las medidas adoptadas por los países en respuesta a la crisis han dado prioridad al empleo y los medios de vida de las mujeres. Si no se toman medidas muy específicas, las mujeres pobres quedarán fuera del sistema: deberán buscar empleos precarios de menor productividad, con ingresos exigüos y sin protección social. Muchas se vuelven más vulnerables a la trata de personas y a formas de trabajo peligrosas o ilegales.

Es imprescindible establecer medidas para proteger a las mujeres de los peores impactos de las crisis. Sin embargo, también hay una gran necesidad de políticas de desarrollo social que asuman el género como un paso decisivo hacia la igualdad y el mayor bienestar de las personas. Como se vio en crisis anteriores en Asia y América Latina, los indicadores sociales demoran el doble en recuperarse de las crisis y es preciso vigilarlos atentamente, al igual que el crecimiento económico. Este último ha dejado de ser una medida válida del bienestar humano y social. Se necesita un cambio de paradigma, y reflejarlo en la práctica. No se trata de tener la meta del crecimiento y formular algunas políticas para la mujer, o para las familias pobres, sino de diseñar y aplicar un nuevo paradigma de desarrollo con derechos y oportunidades iguales para todos y todas.

Desafíos globales: un vistazo general

En Asia, África, Europa, América Latina y el Medio Oriente, los movimientos feministas han reconocido los efectos positivos de los acuerdos internacionales sobre las vidas de las mujeres y las niñas. Sin embargo, en algunas regiones se ha observado un aumento del extremismo religioso y/o el conservadurismo de derecha que se asocia a la perpetuación y propagación de leyes que discriminan a la mujer. Muchos estados y partidos políticos manipulan el derecho de las personas a la diversidad cultural y religiosa como un pretexto para violar los derechos humanos de las mujeres, las niñas, las personas portadoras de VIH/SIDA y las que tienen orientaciones sexuales diferentes². La opresión política de las mujeres y sus derechos se potencia por el conflicto armado y una concentración excesiva en la militarización en lugar del bienestar humano como forma de garantizar la seguridad.

Pueden observarse variantes de este fenómeno en África y otras regiones en desarrollo a

las que las crisis han llegado por diversos canales de transmisión. También se ha vuelto necesario utilizar una perspectiva de género para decodificar situaciones que ocurren dentro de los hogares, ya que las personas que comparten el mismo techo tienen relaciones de poder asimétricas³. Además, a pesar de los cambios actuales en los roles sociales, la división del trabajo por sexo dentro de los hogares sigue siendo muy rígida. Las limitaciones que esta división del trabajo impone a las mujeres, y las jerarquías sociales que se basan en ella, determinan una situación desigual en tres sistemas estrechamente vinculados: el mercado de trabajo, el sistema de bienestar o las prestaciones sociales y el hogar.

Esta recesión global es el momento perfecto para crear un nuevo modelo de desarrollo en el que la igualdad de género y la inclusión social deben ser prioridades fundamentales. Es necesario repensar los modelos macroeconómicos que se basan en mantener baja la inflación y la balanza de pagos controlada, y reconocer que una economía en crecimiento requiere salarios mínimos vitales y que todas las personas contribuyan a la productividad económica. Esto también requiere el reconocimiento de que una economía productiva depende de una amplia economía del cuidado en la que la mano de obra es predominantemente femenina. Ha llegado el momento de un nuevo paradigma del desarrollo con derechos y oportunidades iguales para todos. ■

1 Este artículo es el resultado del trabajo de los grupos de trabajo de género de Social Watch, que se basa en hallazgos del Social Watch 06 Cuadernos ocasionales, *La hora de la economía de género* (marzo de 2010). Fue redactado por Enrique Buchichio y Amir Hamed, del Secretariado de Social Watch.

2 Ver, por ejemplo: Social Watch, *La hora de la economía de género – A 15 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer*, marzo de 2010. Disponible en: <www.socialwatch.org/node/11578>.

3 Equipo de Investigación de Social Watch, *Género y pobreza: un caso de desigualdades entrelazadas*, 2005. Disponible en: <www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/en/genderpoverty2005_eng.pdf>.

Nace ONU Mujeres: ¿estará a la altura de los desafíos?

Geneveva Tisheva y Barbara Adams

Las organizaciones y los grupos de mujeres de todo el mundo celebraron la resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 2 de julio de 2010, que establece la entidad de la ONU para la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer: ONU Mujeres. Esta nueva entidad estará dirigida por una Secretaria General Adjunta y consolidará y fusionará las cuatro entidades existentes dedicadas al género, aumentará la capacidad operativa a nivel de los países y tendrá más autoridad y recursos para impulsar el empoderamiento y la promoción de la mujer.

En esta resolución, llaman especialmente la atención los párrafos sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en la nueva entidad. La nueva organización ampliará su capacidad operacional en los países: entre otras cosas, se relacionará con grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esta resolución sólo fue posible por todo el trabajo de promoción y el compromiso firme de los movimientos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil en el transcurso de los últimos cuatro años. Esto comenzó con la aprobación del Informe 2006 sobre la Reforma de la ONU del Panel sobre la Coherencia de todo el Sistema, que incluyó la recomendación de establecer una nueva entidad para aumentar la autoridad, los recursos y la

capacidad de la ONU en su trabajo por la igualdad de género. En el entendido de que se precisaba un esfuerzo más fuerte por parte de la sociedad civil para la conformación de la nueva entidad, varios de esos grupos se unieron en la Reforma de la Arquitectura para la Igualdad entre los Géneros o Campaña GEAR (por sus iniciales en inglés). Charlotte Bunch, ex directora ejecutiva del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, miembro fundador de la campaña GEAR, declaró: "Tenemos grandes expectativas para esta nueva agencia: los grupos de mujeres y otras organizaciones dedicadas a la justicia social, los derechos humanos y las organizaciones de desarrollo que desempeñaron un papel fundamental en este esfuerzo deben trabajar ahora para asegurar que este nuevo organismo cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para tener éxito".

El primer desafío importante que deberá enfrentar ONU Mujeres es si adoptará el modelo tradicional de multilateralismo, por el que las decisiones se toman sólo por los gobiernos y el proceso político tiende a diluir las recomendaciones sobre las políticas. Este modelo no ha logrado impulsar el desarrollo sostenible en todos los países ni enfrentar el desajuste entre las políticas macroeconómicas y los enfoques de justicia de género. Los defensores de la igualdad de género en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los gobiernos y las agencias de la ONU deben empezar a cerrar esta brecha, y la prueba para ONU Mujeres es si podrá brindar la visión y el liderazgo necesarios. ■

Clima planetario: el derrumbe de Copenhague

Md Shamsuddoha

Grupo de Trabajo Equidad y Justicia de Bangladesh¹

La 15ª Conferencia de las Partes (CoP15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebró en Copenhague en diciembre de 2009, no arrojó el acuerdo vinculante que se requiere para limitar el aumento de la temperatura promedio mundial a no más de 2º Celsius. Los diferentes intereses de las partes dividieron a la CMNUCC en dos grupos: los 40 países industrializados y economías en transición del Anexo I, y los países que no forman parte del Anexo I. Los 26 miembros del supuesto "grupo representativo de líderes", la mayoría de los cuales provienen de países del Anexo I, sólo lograron establecer un Acuerdo mediante un proceso no transparente, verticalista y muy restrictivo.

El mecanismo de "revisión y compromiso de abajo hacia arriba" para la reducción de emisiones², que establece el Acuerdo no cumplirá los objetivos de reducción que aconseja el Grupo Interguberna-

mental de Expertos sobre el Cambio Climático: entre el 25% y el 40% por debajo del nivel de 1990. Los compromisos que se han asumido hasta el momento bajo el Acuerdo no reflejan las exigencias de los delegados con respecto a acciones o compromisos "ambiciosos" y "enérgicos" para la mitigación. De hecho, la aprobación de un Acuerdo "no vinculante" es un logro diplomático para los países desarrollados y los países en desarrollo más avanzados.

Desde que se aprobó el Plan de Acción de Bali en la 13ª Conferencia de las Partes en diciembre de 2007, miles de delegados han trabajado en el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Acción Cooperativa a Largo Plazo (AWG-LCA, en inglés) y el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre los Futuros Compromisos de las Partes del Anexo I bajo el Protocolo de Kioto (AWG-KP, en inglés). Incluso en Copenhague, a pesar de sus múltiples diferencias, los delegados trabajaron intensamente para acortar al máximo las distancias y luego presentaron al plenario final los documentos más actualizados que surgieron de ambos grupos de trabajo.

Con este trasfondo, hubo un intento paralelo por parte de la presidencia danesa de imponer una propuesta del "grupo representativo de líderes". Cuando Lars Løkke Rasmussen, el primer ministro danés, presentó el Acuerdo de Copenhague ante la CoP y solicitó su aprobación, fue duramente criticado por apelar a un procedimiento de toma de

decisiones verticalista que violaba la carta de la ONU y desafiaba las costumbres tradicionales e históricas de toma de decisiones de la organización.

Si bien las conversaciones sobre el clima habían sido hasta el momento de las negociaciones internacionales más transparentes, la reunión de Copenhague restringió mucho la participación de representantes de la sociedad civil, a pesar de estar debidamente acreditados y existir un mandato para que participaran en todo el proceso. En los últimos días los representantes de la sociedad civil fueron reducidos a unos pocos cientos. Aunque algunos países en desarrollo y algunos países menos adelantados (PMA) apoyaron la aprobación del Acuerdo, muchos de los países en desarrollo condenaron el proceso enérgicamente por ser "no transparente" y "antidemocrático", y se negaron a dar su respaldo al Acuerdo en tanto decisión de la CoP.

Finalmente, durante una negociación informal facilitada por Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, las partes acordaron aprobar una decisión de la CoP en la que la Conferencia "toma nota" del Acuerdo, lo que significa que no fue aprobada ni admitida por la reunión. El Acuerdo no puede entonces considerarse como un "esfuerzo colectivo" para combatir la crisis climática. La construcción de un esfuerzo colectivo requiere la participación eficaz, transparente y responsable de todos los grupos de interés – gobiernos, organizaciones de la

1 Este documento no constituye la expresión de la postura de ningún país parte o grupo.

2 Este mecanismo exige una forma dinámica de cooperación internacional en la que los países deben estar capacitados para asumir compromisos renovados en relación con la reducción de emisiones en forma continua.

sociedad civil e instituciones financieras—de manera integrada, garantizando que todos trabajen en forma equitativa al servicio de la prosperidad, el bienestar y la sustentabilidad mundiales.

Más de 120 países, responsables por más de cuatro quintos de las emisiones de GEI del mundo, han optado por dar su respaldo al Acuerdo, y muchos han presentado una notificación de reducción de emisiones voluntaria por medio del procedimiento de “compromiso y revisión”. Sin embargo, aunque los compromisos están sujetos al escrutinio internacional, no existen mecanismos para asegurar que se realicen acciones para lograr los objetivos. Es más, aun si los compromisos actuales se cumplen en su totalidad, es posible que la temperatura media mundial aumente en tres grados o más para fin de siglo³.

Los intentos de los países desarrollados por fortalecer y extender el modelo de “compromiso y revisión” bajo el disfraz del Acuerdo de Copenhague les hubiera permitido evadir su responsabilidad y la deuda del carbono que mantienen con los países en desarrollo por el uso histórico y excesivo que han hecho del espacio atmosférico del planeta. Este exceso del consumo ha dado lugar a una deuda de adaptación, ya que son los países en desarrollo los

que han padecido — y continúan padeciendo — los peores impactos del cambio climático, y también a una deuda de emisiones. Por lo tanto, son los países desarrollados quienes deben abocarse a la reducción enérgica de las emisiones internas y permitir a los países en desarrollo que aumenten las suyas para que puedan cumplir con sus necesidades de desarrollo sostenible.

La “muerte” de Kioto

Luego de los frustrantes resultados de la Conferencia de Copenhague, ha surgido una nueva polarización en torno a la diplomacia sobre el clima. Por otra parte, el Acuerdo tampoco aporta mayor claridad con respecto a cómo avanzará el proceso de negociaciones.

Casi todos los países desarrollados alzaron sus voces en conjunto para desmantelar el Protocolo de Kioto, agrupar las dos vías en una y producir sólo un resultado legal asegurando la inclusión de los países en desarrollo más avanzados. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene intenciones de ratificar el Protocolo ni de aceptar un acuerdo vinculante. Prefiere en su lugar algún tipo de “acuerdo de ejecución” de abajo hacia arriba, que formalice y fortalezca, mediante un conjunto de decisiones claras en base a la CMNUCC, las estipulaciones actuales de la Convención sobre el Cambio Climático con respecto a compromisos para reducir la emisión de GEI que sean voluntarios, no vinculantes y que abarquen a toda la economía, e informar acerca de las emisiones. Este enfoque de

“compromiso y revisión” contradice abiertamente el Protocolo de Kioto y les brinda a los países libertad de acción para decidir qué tipo de objetivos adoptar y cómo cumplirlos.

El Protocolo de Kioto, que estableció una coalición mundial entre políticos, expertos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y personas de todo el mundo, describía un enfoque integral para afrontar los desafíos del cambio climático. En la actualidad, el enfoque selectivo de las opciones preferibles que adoptan los países desarrollados recuerda las palabras de la administración Bush: “Kioto ha muerto”⁴. En ese entonces, la afirmación fue muy criticada en los países de todo el mundo; ahora, esos mismos países deben esforzarse para que el Protocolo de Kioto siga funcionando hasta llegar a la próxima fase.

La múltiple polaridad que está surgiendo en la diplomacia climática mundial tiene como resultado que diversos actores clave puedan obstaculizar todos los avances significativos en las futuras negociaciones para la CoP 16, que se llevará a cabo en noviembre de 2010 en Cancún (México). Sin una postura política complementaria entre los países en desarrollo más avanzados y los desarrollados, EEUU entre ellos, es poco probable que se logren conquistas y resultados positivos con respecto a la política climática. ■

3 Wolfgang Sterk et. al., *Something Was Rotten in the State of Denmark – Cop-Out in Copenhagen* (“Algo huele mal en el Estado de Dinamarca – falta de responsabilidad en Copenhague”), Instituto de Clima, Medio Ambiente y Energía de Wuppertal, abril de 2010.

4 Dick Thompson, “Why U.S. Environmentalists Pin Hopes on Europe,” *Time*, 26 de marzo de 2001.

La financiación climática y los ODM

Ian Percy

El monto de USD 30.000 millones para la financiación “nueva y adicional” que se defiende en el Acuerdo de Copenhague dista mucho de estar asegurado. Puede que la cifra refleje las prioridades de la ONU y el compromiso con relación a la mitigación y adaptación para el cambio climático, pero las tendencias históricas no son alentadoras. Los países desarrollados donantes no están en vías de cumplir con el objetivo del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto (INB) de AOD para 2015. Ya existen informes de la sociedad civil finlandesa, por ejemplo, acerca de que la financiación climática se está retirando del presupuesto para el desarrollo¹. La situación es similar en la mayoría de los países que asumieron los compromisos. Por otra parte, la organización BetterAid informa que se prevé que las recaudaciones para la ayuda disminuyan en más de USD 2.000 millones cuando los fondos climáticos para países de ingresos medios comiencen a erosionar el presupuesto destinado a la ayuda².

1 Better Aid. Disponible en: <www.betteraid.org/index.php?option=com_content&view=section&id=110&Itemid=60&lang=en>.

2 *Ibid.*

Al no cumplirse con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) el desarrollo queda muy rezagado con relación a otros objetivos en muchas partes del mundo. A menudo se señala la falta de financiación para el desarrollo como la causa de la lentitud de los avances en la realización de los objetivos. Teniendo en cuenta las tendencias actuales, es fácil imaginar una caída brusca de la AOD destinada a actividades no climáticas. Los líderes políticos, sobre todo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se ven sometidos a crecientes presiones para mostrar que la ayuda que proporcionan obtiene resultados. Existe el peligro real de que se hagan a un lado las metas de desarrollo menos cuantitativas en beneficio de las estrategias verificables de mitigación y adaptación al cambio climático.

En la 16ª Conferencia de las Partes en Cancún deberán establecerse líneas de base para la financiación climática, como forma de garantizar que los donantes y los países en desarrollo no pierdan de vista los compromisos vinculados al desarrollo. Si no se contara con calificaciones verificables y concisas con respecto a los fondos “nuevos y adicionales”, existe el peligro de que la educación y otras prioridades de desarrollo pasen a desempeñar un papel secundario con relación a los parques eólicos y los proyectos de biomasa. ■

Participación accionaria crítica: cómo apoyarse en las finanzas para promover los derechos humanos y el medioambiente

Andrea Baranes

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM)

Mauro Meggiolaro

Fundación Cultural Responsabilidad Ética

A fines de la década de 1960 surgió en los Estados Unidos una nueva concepción de finanzas éticas cuando los derechos civiles, y posteriormente las protestas contra la guerra, comenzaron a generalizarse. En 1968, los estudiantes de la Universidad de Cornell exigieron que el consejo se deshiciera de las acciones de empresas dedicadas al comercio con Sudáfrica. Unos años más tarde se creó el "Pax World Fund", que excluyó a las empresas involucradas en la guerra de Vietnam.

El fundamento para excluir algunas inversiones fue ampliado, y comenzó a incluir consideraciones sociales. Más importante aún, desde finales de la década de 1960 no sólo se excluyeron algunos sectores específicos como armamento o juegos de azar, sino a las empresas y bancos que participaban en dichas actividades. Más tarde comenzaron a tenerse en cuenta algunos nuevos criterios, específicamente el historial de las empresas en cuanto a derechos humanos y medioambiente. Esta resultó ser una poderosa manera de boicot a las empresas que hacían negocios con regímenes racistas (por ejemplo, Sudáfrica durante el Apartheid) o con dictaduras (como Chile bajo Pinochet).

Históricamente, estos primeros casos fueron extremadamente importantes para poner de relieve el papel que pueden desempeñar los accionistas para influir en el comportamiento de una empresa. Varios casos de desinversión y boicot a empresas específicas, países o sectores lograron resultados impresionantes.

Sin embargo, la desinversión en acciones de una sociedad significa cortar toda relación con la misma, junto con la oportunidad de intentar influir en su comportamiento. En contraste, ser accionista significa poseer una parte de la sociedad, por pequeña que sea, manteniendo así una relación y participando activamente en la vida de la misma para tratar de cambiar su historial social en general.

Los principios de la participación accionaria crítica

En varios países, las organizaciones y redes de la sociedad civil han comenzado una nueva forma de cabildeo y una nueva herramienta de campaña: la "participación accionaria crítica". La idea es muy simple: comprar algunas acciones de empresas acusadas de tener un impacto social y medioambiental negativo, particularmente en lo que respecta a sus inversiones en el Sur global, a fin de participar activamente en la vida de la empresa. En general, las empresas se seleccionan por su historial negativo social, medioambiental y de derechos humanos, su polémico impacto en los procesos de desarrollo locales y nacionales, su falta de transparencia, débil gobernanza democrática y por su total falta de rendición de cuentas.

El objetivo de la participación accionaria crítica es por lo menos triple:

En primer lugar, ofrece la oportunidad de hacer llegar directamente la voz de las comunidades del Sur y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil a los directorios y accionistas de la empresa.

En segundo lugar, con respecto a la cultura financiera general, la participación accionaria crítica es un instrumento de "democracia económica" que aumenta el conocimiento y la participación de pequeños accionistas y del público en general en cuestiones financieras.

Por último, desde el punto de vista de los inversores, la participación accionaria crítica aumenta la representación de los pequeños accionistas en la vida de la empresa. Un informe de 2009 de la OCDE señala que una de las principales razones de la crisis fue la mala planificación de la gobernanza corporativa de muchas compañías¹. Este mismo informe de la OCDE se compromete a aumentar la participación de los pequeños accionistas en la vida y las decisiones de las empresas. La participación accionaria crítica va precisamente en esa dirección y puede contribuir al aumento de la democratización y rendición de cuentas del sector privado.

Redes internacionales y resultados iniciales

En varios países europeos, así como en los Estados Unidos, el compromiso activo de los accionistas se ha convertido en una práctica generalizada. Las intervenciones y propuestas de los pequeños accionistas activos han ayudado en muchos casos a mejorar la responsabilidad medioambiental y social, la gobernanza, rendición de cuentas y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Esta estrategia ya ha sido utilizada en campañas orientadas a la responsabilidad de corporaciones del norte, en solidaridad con las comunidades afectadas en el Sur global, a fin de promover su derecho al desarrollo.

En algunos casos la participación de los accionistas está asociada con las estrategias tradicionales de campaña. En marzo de 2010, una coalición de sindicatos del Reino Unido, ONG e inversores intentó conseguir que miles de miembros de los planes de pensiones se unieran a una campaña de bombardeo de correos electrónicos destinada a forzar a los gigantes petroleros BP y Royal Dutch Shell a reconsiderar inversiones en la explotación ambientalmente polémica de arenas petrolíferas en la provincia de Alberta, Canadá. En lo que llamaron una "movilización pública sin precedentes", la coalición pidió a los ahorristas que enviaran correos electrónicos a los administradores de sus fondos de pensiones para obligarlos a apoyar las resoluciones de los accionistas en contra de los proyectos de arenas petrolíferas que debían votarse en las AGA de BP y Shell

en mayo. Otros miembros de la coalición incluían a Greenpeace, la World Wildlife Foundation y el grupo de la banca cooperativa. Más de 140 planes de pensiones, administradores de los fondos e inversores privados unieron fuerzas con FairPensions, un grupo de cabildeo con sede en Londres, para presentar una resolución de accionistas en la asamblea general de Shell el 18 de mayo.

En Italia, la Fondazione Culturale Responsabilità Ética (Fundación Cultural de Responsabilidad Ética, FCRE), controlada por el banco ético-ecológico Banca Etica, también ha decidido combinar las herramientas tradicionales de campaña de las ONG con una nueva forma de participación a través de la inversión en grandes compañías². Ya en 2008, FCRE compró algunas acciones de empresas petroleras y de servicios públicos italianas (Eni y Enel, respectivamente) con el fin de participar en sus Asambleas Generales Anuales, dando voz a las ONG medioambientales y sociales, como Greenpeace Italia y CRBM, con sede en Italia y en países en desarrollo. En los últimos tres años, la Fundación ha cuestionado el historial social y medioambiental de ambas compañías apoyada por una serie de asociaciones en Nigeria, Chile, Congo-Brazaville, Kazajistán y otros países donde Eni y Enel tienen actividad, junto con sus operaciones subsidiarias en países señalados como paraísos fiscales.

La participación accionaria crítica como herramienta de campaña

Si bien se han logrado varios resultados mediante la participación activa de pequeños accionistas, no se pueden subestimar algunos aspectos críticos. En primer lugar, no hay que reconocer que el diálogo con una compañía debe pasar únicamente a través de la propiedad de acciones. Este supuesto reforzaría precisamente la idea de que los accionistas están ganando cada vez más peso con respecto a las demás partes interesadas. Ser inversionista podrá garantizar algunos derechos, pero de ninguna manera debe sustituir otros canales de diálogo y formas de presión sobre una empresa. Esto es tanto más cierto si el diálogo o la confrontación con la empresa abordan algo tan fundamental como los derechos humanos.

Por el contrario, la participación accionaria crítica debe ser considerada como una herramienta más entre una serie de instrumentos diferentes que tienen que ponerse en marcha en una campaña, y debería utilizarse en conjunto y reforzar otras herramientas de campaña.

A través de la participación accionaria crítica se puede aumentar la cultura financiera de los pequeños inversores. No es sólo una cuestión de mejorar el comportamiento de una empresa. Hace falta una nueva cultura financiera. ■

¹ Kirkpatrick, Grant, *The corporate governance lessons from the financial crisis*. OCDE, 2009. Disponible en: <www.oecd.org/dataoecd/32/1/42229620.pdf>.

² Ver: <www.fcree.it>.

Privatización de las finanzas europeas para el desarrollo: el rol del Banco Europeo de Inversiones

Antonio Tricarico (coordinador)

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM)

Las finanzas europeas para el desarrollo están en una encrucijada. El impacto de la crisis económica y financiera sobre las finanzas públicas en la mayoría de los estados miembros de la UE está revirtiendo la tendencia de la última década de creciente Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). A pesar de que los gobiernos europeos siguen siendo los principales donantes y suministran más de la mitad de la AOD global, está cada vez más claro que la UE en su conjunto no alcanzará sus objetivos para 2015.

En este contexto negativo, surge un discurso nuevo y oportunista en los círculos oficiales en Bruselas y en otras capitales europeas sobre la necesidad de un enfoque más “holístico” de la cooperación internacional y las finanzas para el desarrollo.

La participación del sector privado

La financiación del sector privado por parte de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) aumentó diez veces desde 1990, desde menos de USD 4.000 millones hasta más de USD 40.000 millones al año. Las finanzas del sector privado son ahora una parte importante de la cartera global de muchas multilaterales y constituye cerca de la mitad de la AOD.

La sociedad civil internacional ha destacado recientemente que el planteamiento de los BMD con respecto al sector privado y el desarrollo no siempre estuvo suficientemente centrado en la promoción del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Tanto la selección de proyectos por parte de los BMD, como sus procedimientos de control y evaluación tendieron a priorizar los retornos comerciales frente a los sociales y ambientales. El rápido crecimiento de las inversiones del sector financiero en condiciones de mercado a través de intermediarios como los bancos privados o empresas de capital privado es objeto de particular preocupación. Según muestran nuevas investigaciones, varios intermediarios respaldados por los BMD operan a través de centros financieros en paraísos fiscales y pueden contribuir a la fuga de capitales desde el Sur Global hacia el Norte.

El Banco Europeo de Inversiones: un caso de estudio

La tarea del BEI es contribuir a la integración, el desarrollo equilibrado y la cohesión económica y social de los estados miembros de la UE. Fuera de la UE opera bajo diversos mandatos. En diciembre de 2006, el Consejo Europeo aprobó un nuevo Mandato de Préstamos Externos (MPE) del BEI para 2007-2013.

Las organizaciones de la sociedad civil que controlan los préstamos del BEI han planteado su preocupación durante la última década acerca de la ambigüedad fundamental con respecto al estado de este banco público, que claramente no es un banco de desarrollo regional ya que financia operaciones de inversión supuestamente accesibles para el desarrollo sin respetar las políticas y los objetivos europeos de desarrollo de acuerdo al estatuto.

El proceso de revisión también introdujo dos evaluaciones externas, la más importante de las cuales fue realizada por un comité de dirección *ad hoc* de “consejeros” establecido por el Banco y el CE y presidido por Michel Camdessus, ex director del FMI. Entre las recomendaciones del informe final, se plantearon preocupaciones que incluyen el hecho de que las políticas de la UE sólo se traducen en forma muy limitada en las estrategias de préstamos y en el análisis económico y sectorial de las necesidades de los países por parte del BEI; que los esfuerzos del BEI para monitorizar la implementación de los proyectos, asegurar la presencia local y hacer un seguimiento de los aspectos medioambientales y sociales aún parecen insuficientes; y que la capacidad del BEI de cumplir con los requisitos del mandato en los aspectos de desarrollo es sólo indirecta.

Asistencia corporativa y decepciones del desarrollo

A pesar de que la inversión extranjera directa (IED) puede contribuir con los procesos de desarrollo endógenos, esto sólo se cumple hasta cierto punto y bajo condiciones muy específicas, según lo documenta en detalle la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Las intervenciones financieras contracíclicas en el contexto de las crisis requieren un enfoque mucho más ambicioso que un mero apalancamiento de las finanzas del BEI en el Sur.

Forzar la transformación de algunos préstamos del BEI en instrumentos financieros adecuados para el desarrollo por medio del establecimiento de vínculos operativos con el sistema de ayuda de la UE – Fondo Europeo de Desarrollo, instrumento de financiamiento de la cooperación para el desarrollo (FCD) y EuropeAid – puede ser demasiado arriesgado si se hace precipitadamente y sin las adecuadas garantías de que el BEI podrá cumplir con los estándares de la ayuda de la UE. La naturaleza intrínsecamente diferente de estas instituciones y mecanismos podría poner en peligro los progresos logrados con esfuerzo y aún limitados que se han alcanzado dentro de Europa, en relación con la implementación de las prioridades claves para eficacia de la ayuda (entre las cuales están la propiedad del país receptor, la alineación con las estrategias del país receptor y la transparencia).

El futuro de las finanzas de la UE para el desarrollo

Es necesario repensar la arquitectura de las finanzas de la UE para el desarrollo a la luz de los cambios importantes que ha provocado la crisis, la posibilidad de que no se cumplan las pautas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los nuevos desafíos impuestos por la cooperación internacional y la promoción de bienes públicos globales.

Desde esta perspectiva, es crucial que se aborde la transformación del BEI para impulsar las finanzas de la UE para el desarrollo en la dirección correcta. A corto plazo, el BEI debe permanecer sólo como vehículo de inversión, a pesar de que el alcance de sus acciones fuera de la UE debe restringirse (tanto en sentido geográfico como sectorial). La acción exterior del BEI se debe alinear estrictamente con los objetivos generales de la UE para el desarrollo y los derechos humanos. Por otra parte, los principios de eficacia del desarrollo van más allá de la ayuda y se deben aplicar también a las actividades bancarias de inversiones con respaldo público en los países en desarrollo, incluidas aquellas promovidas por las IEFD.

Además, el BEI debe garantizar que todas las inversiones tengan resultados claros para el desarrollo, en particular en los sectores en los que es más activo, como infraestructura, energía y actividades extractivas. Como institución pública, también debe garantizar que las empresas e inversiones que apoya cumplan con los más altos estándares financieros con el fin de terminar con la evasión de impuestos y la fuga de capitales a la UE y ayudar a restituir los activos robados a sus países de origen. ■

El Tratado de Lisboa y las nuevas perspectivas para la política de desarrollo de la UE

Mirjam van Reisen
EEPA
Simon Stocker
Eurostep

El Tratado de Lisboa contiene disposiciones para enfrentar la pobreza y la exclusión social dentro de la UE, algo particularmente importante en este 2010 que ha sido declarado como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y en un momento en que el 16% de su población es pobre. Los fondos europeos de cooperación para el desarrollo han aumentado en los últimos años. Sin embargo, los aportes al sector social de los países en vías de desarrollo, especialmente en África Subsahariana, se han reducido considerablemente.

Se esperaba que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1° de diciembre de 2009, dotara a la Unión Europea (UE) de "instituciones modernas y métodos de trabajo perfeccionados" para enfrentar los retos del mundo actual de manera eficiente¹. Luego de ser ratificado por todos los miembros de la UE se dispuso orientar todos los esfuerzos para "la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza" (Art. 208).

El Tratado identifica cuatro elementos clave: coherencia, consistencia, complementariedad y coordinación. El principio de "coherencia" establece que la UE "tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo. En noviembre de 2008 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo por el que las operaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en los países en desarrollo deben priorizar el desarrollo sobre cualquier objetivo económico o político.

La comunicación de la Comisión Europea sobre "Coherencia de las Políticas a favor del Desarrollo—Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio" subrayó el hecho de que la ayuda por sí sola no es suficiente para alcanzar los ODM². Abarca 12 ámbitos principales: comercio, medio ambiente, cambio climático, seguridad, agricultura, acuerdos de pesca bilaterales, políticas sociales (empleo), migraciones, investigación e innovación, tecnologías de la información, transporte y energía.

De acuerdo con la comunicación de la CE, en mayo de 2010 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo (CPD) con más de 70 recomendaciones. La resolución señaló que:

- Los "temas de Singapur"³, la liberalización de los servicios, la inversión y las adquisiciones gubernamentales, las nuevas normas de competencia y un mayor

respeto de los derechos de propiedad intelectual, no colaboran en alcanzar los ocho ODM.

- Los subsidios de la UE a la exportación de productos agrícolas europeos tienen un efecto desastroso sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo de un sector agrícola que sea viable en los países en desarrollo.
- Como uno de los grandes exportadores de armas, la UE exporta o facilita el envío de armas a los mismos países donde se gastan millones en asistencia para el desarrollo; la UE-15 gasta unos EUR 70.000 millones por año en asistencia para el desarrollo, mientras que el valor de las exportaciones de armas de la UE es de unos EUR 360.000 millones por año.
- Las estrategias de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales promueven el acceso de la UE a los mercados de materias primas de los países en desarrollo, incluso los de productos agrícolas básicos, abriéndolos a las grandes empresas de la UE a costa de los pequeños agricultores y las industrias incipientes.
- La liberalización financiera, que incluye flujos financieros especulativos y volátiles, sobre la cual los países en desarrollo carecen de control, ha generado una inestabilidad considerable a escala internacional con efectos desastrosos sobre las economías de los países en desarrollo⁴.

Si bien el Tratado de la UE establece un marco legal claro para erradicar la pobreza dentro y fuera de la Unión Europea, las estadísticas de Eurostat indican que los efectos de la crisis sobre el mercado laboral europeo están lejos de disiparse. De hecho, en 2009 el desempleo aumentó en más de 5 millones de personas para alcanzar unos 21,4 millones en la UE, en buena medida debido a los empleos perdidos en los últimos 12 meses⁵. Según la UE, unos 80 millones – o el 16% de la población – viven hoy en la pobreza⁶.

La crisis de los préstamos hipotecarios de alto riesgo, con sus consecuencias desfavorables para los bancos, los mercados financieros y la economía real en todo el mundo, arroja luz sobre la ineficacia de la normativa de la UE para proteger al euro de las especulaciones. Después del efecto inicial de la crisis en Europa y el colapso financiero en Grecia, la UE se plantea ejercer un mayor control sobre los presupuestos nacionales europeos.

Repercusiones fuera de la UE

Los fondos europeos de cooperación para el desarrollo han seguido creciendo de USD 11.200 millones en 2005 a USD 15.400 millones en 2009⁷. Sin embargo, los aportes al sector social en los países en desarrollo, especialmente en África Subsahariana, se han reducido considerablemente.

En su informe de 2009, el Tribunal de Cuentas Europeo indicó que "en el África Subsahariana, los ODM de salud fueron los que más se salieron de curso"⁸. Según un reciente artículo, "la asistencia para el desarrollo destinada a la salud (DAH) que se entregó al Gobierno tuvo un efecto tan negativo e importante sobre el gasto público nacional en salud que, por cada USD 1 de DAH, los gastos del Gobierno en salud a partir de recursos internos se redujeron en USD 0,43 a USD 1,14"⁹. Parecería que el apoyo al sector social por medio del apoyo presupuestario general no da como resultado un aumento automático del gasto en esos sectores.

Un estudio de los compromisos europeos indica que las asignaciones para atención básica de la salud y educación han disminuido en forma constante desde 2005. Como indicó Alliance 2015: "en consecuencia, en 2008 sólo el 5,7% de toda la asistencia gestionada por la Comisión Europea ha sido asignada a la salud y la educación, lo que es menos que el 11% asignado en 2005"¹⁰. En África Subsahariana las asignaciones para atención básica de la salud y educación han caído del 8% del total de la asistencia asignada en 2005 al 1,5% en 2008¹¹. Las cifras muestran que el porcentaje asignado para alimentos cayó del 4% del total de los fondos en 2005 al 1,5% en 2008; para atención básica de la salud del 4,7% (2005) al 1,3% (2008) y para educación básica del 2,7% (2005) al 1,1% (2008)¹². Según Alliance 2015, para alcanzar los ODM a tiempo "la CE debería aumentar los fondos de EUR 605 millones a EUR 971 millones por año para educación y de EUR 460 millones a EUR 1,500 millones para salud, a fin de cubrir esta brecha no financiada"¹³.

Tanto la Comisión Europea como el SEAE deberán enseñar con el ejemplo, especialmente porque cada vez más van a representar a toda la UE en el exterior. La drástica disminución del aporte de la Comisión Europea a la educación y la salud en los países en desarrollo es inaceptable y debe ser revertida. ■

7 Mirjam Van Reisen, ed., *The EU's Contribution to the Millennium Development Goals: Keeping the goals alive* (Praga: Alliance 2015, 2010).

8 European Public Health Alliance, "European Court of Auditors slams EC development health financing". Disponible en: <www.eph.org/a/3373>.

9 Lu, C. et al., "Public financing of health in developing countries: A cross-national systemic analysis", *The Lancet*, 9 de abril de 2010.

10 Alliance 2015, *op cit.*, 21, table 2.1.

11 *Ibid.*, tabla 2.2.

12 "Alliance 2015 calls on the EU to agree to binding aid targets to reach MDGs," 2 de junio de 2010. Disponible en: <[www.alliance2015.org/index.php?id=25&no_cache=1&tx_ttnews\[tt_news\]=69&tx_ttnews\[backPid\]=9](http://www.alliance2015.org/index.php?id=25&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=69&tx_ttnews[backPid]=9)>.

13 *Ibid.*

1 Texto completo disponible en: <www.europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm>.

2 Disponible en: <www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0134:FIN:EN:PDF>.

3 Se refiere a cuatro grupos de trabajo establecidos en la Conferencia Ministerial de 1996 de la Organización Mundial del Comercio en Singapur.

4 Comisión de Desarrollo del Parlamento, *Report on the EU Policy Coherence for Development and the 'Official Development Assistance plus' concept*: explanatory statement, 2009, 17. Disponible en: <www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0140&language=EN#title2>.

5 Remko HIJMAN, "Population and social conditions", *Eurostat Statistics in Focus*, 79/2009, 1. Disponible en: <ec.europa.eu/eurostat/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-013/EN/KS-SF-10-013-EN.PDF>.

6 Comité de las Regiones, *Local and regional responses to poverty and social exclusion*, junio de 2010.

Los Estados árabes y los ODM: no habrá avances sin justicia social

Ziad Abdel Samad, Director ejecutivo¹
Arab NGO Network for Development (ANND)

En 2000, 22 líderes árabes adoptaron la Declaración del Milenio y se comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. En la última década, muchos acontecimientos políticos, económicos y sociales han afectado los procesos de reforma en los países árabes. La "Guerra contra el terrorismo", que se inició con la invasión y ocupación de Afganistán en 2001, la invasión y ocupación de Iraq en 2003, la guerra israelí contra el Líbano en 2006, el continuo deterioro de las condiciones de vida del pueblo palestino, especialmente después del sitio de la Franja de Gaza en 2007, así como los conflictos internos que surgieron en países como Argelia, Líbano, Somalia, Sudán y Yemen, son hechos que han contribuido a desestabilizar la región. La situación ha empeorado por los efectos devastadores de la crisis alimentaria, el cambio climático y la fluctuación de los precios del petróleo, que tienen efectos negativos sobre los esfuerzos de los países por alcanzar los objetivos de desarrollo.

El año 2010 es muy importante para el proceso de realización de los ODM porque marca diez años desde la adopción de la Declaración del Milenio y cinco antes del final del período de ejecución propuesto.

Por lo tanto, este es un momento oportuno para hacer una evaluación objetiva de los esfuerzos hacia las metas, valorar los procesos y proponer recomendaciones concretas para reencauzar los esfuerzos de la mejor manera posible. Especialmente ahora que casi todos los informes por países, aun los más optimistas, afirman que es poco probable que se logren los objetivos para 2015, por lo menos al ritmo de progreso actual y dadas las consecuencias de la crisis económica mundial.

Los desafíos de los ODM en la región árabe

El Informe Árabe sobre el Desarrollo Humano 2009, que hace foco en el concepto de seguridad humana, revela que los indicadores de desarrollo de la región están muy rezagados con respecto a las promesas realizadas². Subraya los desafíos económicos, destacando que la dependencia de los países árabes de la producción de petróleo hace que sus economías sean muy vulnerables a las fluctuaciones internacionales del precio del crudo. Otro importante desafío económico es su dependencia de la inversión extranjera, lo que aumenta mucho su vulnerabilidad a las depresiones económica mundiales como la experimentada en los últimos años. Además, las economías árabes están dirigidas a los servicios, lo que significa que sus sectores productivos se debilitan cada vez más.

El desempleo sigue siendo un desafío fundamental. La Organización Árabe del Trabajo señala que, en 2008,

el desempleo había aumentado al 14,4%, más del doble de la tasa global del 6,3%. Aunque el porcentaje varía de un país árabe a otro, el desempleo de los jóvenes es muy elevado, pues representan más del 50% de la población desempleada. El desempleo promedio de los jóvenes de la región es del 25,5%³, la tasa más alta del mundo. Además, la persistente discriminación de género en el mercado laboral ha llevado a mayores tasas de desempleo entre las mujeres.

Otro problema igualmente acuciante es que la pobreza acumulada de la región supera el 39%, lo que quiere decir que casi 140 millones de ciudadanos árabes viven por debajo de la línea superior de pobreza y no gozan de su derecho a un nivel de vida adecuado⁴. En 2004, los cálculos indicaban que 25,5 millones de personas padecían hambre y desnutrición, un aumento considerable de personas en esa situación respecto a 1994⁵. El informe preparado por el PNUD y la Liga Árabe, sobre los desafíos que presenta el desarrollo en la región muestra que, a pesar de los avances en Siria y Sudán en cuanto a la autosuficiencia en semillas, la seguridad alimentaria no ha mejorado en forma tangible desde 1990⁶.

ANND: la evaluación de los ODM

A pesar de estos desafíos, el logro de los objetivos de desarrollo también es responsabilidad de los sistemas e instituciones nacionales existentes, y, más concretamente, de los regímenes y autoridades que detentan el poder. La evaluación de los ODM realizada por ANND estudió por tanto los objetivos financieros y de desarrollo, los problemas de género y la transversalización de los objetivos en las políticas nacionales.

En lo que se refiere a financiar y movilizar recursos para el desarrollo y los ODM, la mayoría de los países árabes no ha logrado conseguir recursos locales o regionales por la ineficacia de las políticas para atraer inversiones, asistencia y préstamos extranjeros⁷. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no fue asignada según las necesidades humanas básicas y cuantitativamente no fue suficiente para apoyar a los gobiernos para que hicieran los avances necesarios hacia el logro de los objetivos.

Se ha logrado un pequeño progreso en la transversalización de los ODM en la formulación de políticas nacionales y en la evolución general hacia la realización de los ODM en los ámbitos nacionales, especialmente la inclusión de diversas partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los procesos todavía carecen de mecanismos adecuados para la participación efectiva. Los gobiernos de la región árabe

no han integrado las metas de los ODM en sus planes nacionales de desarrollo.

Con respecto a la transversalización de la dimensión de género en el proceso de realización de los ODM, se debe señalar que, en buena medida, las mujeres de la región árabe continúan excluidas de la vida política y económica. Esta exclusión tiene sus raíces en la estructura patriarcal de las sociedades árabes y la influencia de las normas y los valores tradicionales y religiosos. Un ejemplo claro es la cantidad de reservas formuladas por todos los países árabes que han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), que debilitan su aplicación.

Observaciones en el ámbito de los países

Aunque las posiciones declaradas oficialmente muestran una actitud positiva hacia los ODM y destacan la necesidad de alcanzarlos, estas posiciones permanecen en lo meramente verbal y no se traducen en políticas efectivas ni en estrategias o planes concretos.

Además, la región muestra un contraste considerable entre los indicadores económicos y los de desarrollo. La mayoría de los países árabes productores de petróleo han atravesado un período de relativo crecimiento económico por el aumento de los precios del crudo. Sin embargo, esto no se ha reflejado en avances en términos de desarrollo, pues la mayoría de los países sigue mostrando resultados de desarrollo humano muy escasos.

A pesar de estos contextos problemáticos, muchos informes oficiales sobre los ODM han intentado reflejar una situación más positiva. En consecuencia, no han formulado indicadores concretos y medibles de las estrategias de gobierno, y a menudo se limitan a recomendaciones abstractas y normativas para el futuro.

Para alcanzar los ODM en 2015 se necesitan importantes esfuerzos adicionales y voluntad política para fortalecer la adopción y aplicación de políticas de desarrollo. Para ello, las metas concretas y medibles pueden servir de herramienta de evaluación de los avances.

Un compromiso político sincero, que se refleje en políticas públicas y planes concretos de desarrollo, debería basarse en la integridad y la transparencia. La participación ciudadana, a través de las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés, es un factor importante para lograr buenos resultados. Esto exige una reforma del sistema administrativo para superar la corrupción sistemática que lo debilita. En ese sentido, la adopción y aplicación de la Convención de la ONU contra la Corrupción contribuiría a reformar el sistema de elaboración de políticas públicas.

Las recomendaciones mencionadas tienen tres condiciones indispensables: democracia para garantizar una participación adecuada, rendición de cuentas y responsabilidad; buena gobernanza para garantizar una adecuada movilización e inversión de los recursos; y justicia social para obtener políticas integrales e inclusivas. Por desgracia, dado que estas condiciones indispensables todavía no existen, la incapacidad de la región para alcanzar los ODM en 2015 resulta evidente. ■

1 El autor le agradece a Marc Van de Weil su valiosa asistencia.

2 PNUD, Dirección Regional para los Estados Árabes, *Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries*, Nueva York, 2009.

3 Organización Árabe del Trabajo, 2003. Ver: <www.alolabor.org/>.

4 PNUD, Dirección Regional para los Estados Árabes y Liga de los Estados Árabes, *Development Challenges in the Arab States: A Human Development Approach*, New York, May 2009.

5 PNUD, Dirección Regional para los Estados Árabes, *op. cit.*

6 PNUD, Dirección General para los Estados Árabes y Liga de los Estados Árabes, *op. cit.*

7 Ver: Ayah Mahgoub, 2009. Disponible en: <blogs.cgdev.org/global_prosperity_wonkcast/2010/03/09/cash-on-delivery-aid-ayah-mahgoub-on-cod-in-education>.

Social Watch: la promoción de la responsabilidad

Social Watch, una red que hoy cuenta con miembros en más de 60 países de todo el mundo, fue creada en 1995 como un “punto de encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género”, respondiendo a la necesidad de promover la voluntad política requerida para hacer realidad las promesas de las Naciones Unidas. Desde entonces, esta red, que crece continuamente tanto cualitativa como cuantitativamente, ha publicado 15 informes anuales sobre los avances y los retrocesos en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad de género, que han sido usados como herramientas de incidencia a nivel local, regional e internacional.

Desde el número 0, publicado en 1996, a la presente edición, la número 15, el Informe de Social Watch ha reunido más de 650 informes de organizaciones de la sociedad civil, todos ellos compartiendo el objetivo de recordar a los gobiernos los compromisos asumidos y rastrear de manera independiente su implementación, país por país y en el plano internacional.

La presente edición, que contiene contribuciones de 64 organizaciones nacionales, mantiene la llama encendida en el momento de la creación de la red en 1995: la necesidad de generar herramientas y estrategias que corrijan la falta de mecanismos de rendición de cuentas y aseguren el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con las políticas sociales y los objetivos de desarrollo.

En la década en que se creó Social Watch, una serie de conferencias de alto nivel de Naciones Unidas – comenzando por la Cumbre de los Niños en 1990 y concluyendo con la Cumbre del Milenio en 2000 – redefinió la agenda social internacional. En 1995, la Cumbre Social (en Copenhague) y la Conferencia de las Mujeres (en Beijing) definieron por primera vez la erradicación de la pobreza y la igualdad de género como objetivos universales en común y fijaron metas y cronogramas concretos para alcanzar la meta que la Carta de la ONU formulara vagamente en 1946 como “dignidad para todos”. Para fomentar la voluntad política necesaria para convertir esas promesas en realidad, Social Watch fue creada como “un punto de encuentro de organizaciones no gubernamentales preocupadas por el desarrollo social y la discriminación de género” (*Social Watch No. 0*, 1996), por un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

Así, el *Informe de Social Watch* se formuló como una poderosa herramienta para la presentación de información estadística disponible internacionalmente, que a la vez diera cuenta del aspecto cualitativo de los problemas abordados mediante el análisis realizado por organizaciones sociales que trabajan directamente con diversas problemáticas a nivel nacional. Desde entonces, Social Watch ha publicado informes anuales sobre los avances y retrocesos en la lucha contra la pobreza y en favor de la igualdad de género, dos objetivos en gran medida superpuestos, ya que la mayoría absoluta de las personas que viven en la pobreza son mujeres.

Los informes anuales de Social Watch, al tiempo que agregan una dimensión internacional a los esfuerzos y campañas locales, se convirtieron en la primera iniciativa sustentable de monitoreo a nivel

nacional dedicada al desarrollo y la equidad de género, y la primera en combinar ambos enfoques dentro de una perspectiva internacional.

El número 0 del Informe, publicado en 1996, incluía las contribuciones de 13 organizaciones; desde entonces, la red ha crecido de forma constante. Actualmente, Social Watch tiene miembros (“watchers”) en más de 60 países en todo el mundo, y su membresía crece todos los años.

Lo local, lo global y el Informe

Cada año Social Watch analiza en profundidad un tema distinto a través del Informe, por lo general relacionado con los temas en discusión en la agenda internacional que pueden abordarse desde una perspectiva local. Expertos de distintos orígenes y disciplinas aportan visiones alternativas a los problemas a través de los artículos temáticos. Esta perspectiva internacional se complementa con la elaboración de los informes nacionales

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GRUPOS NACIONALES Y LA RED SOCIAL WATCH

1. Las coaliciones deben estar basadas en el país y ser activas en los temas del desarrollo social en ese país (no exclusivamente académicos o consultores).
2. Su compromiso básico con la red internacional es aportar un informe nacional, con sus propias conclusiones y definiciones de prioridades, a ser incluido en la publicación anual.
3. Se espera que utilicen su informe nacional y el informe global en las actividades de cabildeo a nivel nacional.
4. Deben estar abiertas a incorporar a otras organizaciones y a trabajar activamente para ampliar el conocimiento sobre Social Watch y promover la participación de otras organizaciones.
5. Son responsables de recaudar fondos para sus actividades. Las coaliciones nacionales no dependen del Secretariado ni de otro organismo internacional de Social Watch para obtener sus fondos, y tampoco están obligadas a rendir cuentas de su situación financiera.
6. Cada coalición escoge su propia estructura organizativa.
7. Existe una incompatibilidad total entre ser miembro de Social Watch y ocupar puestos gubernamentales.
8. Deberá buscarse la cooperación con otras plataformas nacionales a nivel subregional, regional y global.
9. Cuando se plantee un conflicto entre los miembros u organizaciones participantes de una coalición nacional en cuestiones relacionadas con Social Watch (por ejemplo, la elección del punto focal, la contribución al Informe de Social Watch, el nombramiento de los delegados a la Asamblea de Social Watch) todas las partes implicadas deben demostrar su voluntad para resolver los problemas a nivel nacional. Si, en casos excepcionales, no se puede alcanzar un acuerdo, el Comité Coordinador puede tomar las decisiones necesarias.
10. A fin de demostrar su afiliación a la red se alienta a todas las coaliciones a utilizar el logotipo de Social Watch para las actividades nacionales relacionadas directamente con las metas y objetivos de Social Watch. Se les solicita que informen al Secretariado Internacional sobre estas actividades. En otros casos, deberán pedir permiso con antelación al Secretariado Internacional o al Comité Coordinador para otros usos del nombre y el logotipo de Social Watch.

NOTA: El Memorando de Entendimiento se adoptó durante la I Asamblea General, realizada en Roma en 2000, y fue actualizado por última vez en octubre de 2009.



El vicepresidente de India, Hamid Ansari, durante la inauguración del seminario "Evaluación de comités y el sistema de comités: modificando contornos de gobernanza y políticas", organizado por la Coalición de Social Watch en India, en noviembre de 2009.

y regionales en los que las organizaciones que forman parte de la red aportan la visión local, informando sobre el estado de situación en sus países en relación al tema específico de cada año.

Además, Social Watch produce índices y tablas estadísticas con información comparable a nivel internacional que presentan una perspectiva macro de la situación en determinadas dimensiones del desarrollo, pero a la vez habilitando la lectura a nivel nacional. Social Watch ha desarrollado indicadores alternativos para medir los avances y los retrocesos en la equidad de género y en la satisfacción de las capacidades humanas básicas, usados actualmente como referencia tanto por la sociedad civil como por instituciones internacionales. Estos son el Índice de Equidad de Género (IEG) y el Índice de Capacidades Básicas (ICB).

Si bien los miembros utilizan el informe para incidir en distintos ámbitos, tanto los lanzamientos del informe como los lanzamientos de los índices son oportunidades clave para la difusión de sus contenidos, y

tienen lugar no sólo en espacios relevantes del debate internacional sino también en cada uno de los países. El Secretariado publica el informe en varios idiomas: español, inglés, francés, árabe. Algunas coaliciones nacionales también publican sus propias versiones del informe: España, Italia, República Checa, Alemania, Polonia, Europa, India y Brasil. Otras coaliciones publican una selección de materiales. Las coaliciones checa e italiana, por ejemplo, publican el Índice de Equidad de Género, mientras que la coalición de Social Watch en Ghana ha publicado una compilación de sus informes nacionales y Social Watch Benin edita una publicación trimestral, *Social Watch Bénin*. Por otra parte, en diciembre de 2009 se lanzó el primer informe europeo de Social Watch: *Migrants in Europe as Development Actors: Between hope and vulnerability*.

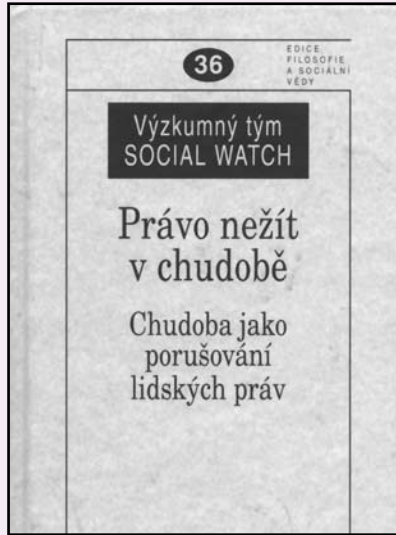
También se han publicado Cuadernos Ocasionales, principalmente con el objetivo de contribuir a la capacitación de las coaliciones miembros, se han realizado varios talleres de capacitación a nivel regional

y se han producido varios documentos de referencia. Por ejemplo, en 2010 Social Watch publicó *Más allá de Beijing – La hora de la economía de género – A 15 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer*¹. Esta publicación se lanzó el 9 de marzo de 2010 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en oportunidad de la revisión de la Comisión de la Condición de la Mujer al conmemorarse 15 años desde la adopción de la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción.

Asimismo, a través de su página web, blog, y presencia en redes sociales virtuales, Social Watch también está utilizando nuevas herramientas multi-media para divulgar información sobre temas relacionados con género, desarrollo y derechos humanos, fomentar discusiones entre integrantes de la sociedad civil y transmitir ideas a políticos y periodistas. Las estrategias de cabildeo, comunicaciones y campaña se complementan mutuamente para alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, Social Watch hace esfuerzos para publicar el informe en otros idiomas y formatos con el objetivo de llegar a una audiencia mayor.

En varias oportunidades, voceros de Social Watch han hablado ante la Asamblea General de la ONU y otros organismos intergubernamentales en representación de la red o de sectores más amplios de la sociedad civil. En agosto de 2009, Social Watch estableció una oficina en Nueva York con el fin de asegurar una presencia

¹ Disponible en: <www.socialwatch.org/es/node/11578>. El primer Cuaderno Ocasional de Mirjam Van Reisen, *Los dientes del León*, aborda el contexto político que dio origen a la creación de Social Watch. El segundo, *Control ciudadano desde la base* de Ana Ma. Arteaga, realiza un análisis de la experiencia de democratización de los instrumentos internacionales de derechos humanos realizada en Chile en 1997. La tercera de estas publicaciones, compilada por Patricia Garcé y Roberto Bissio, introduce la experiencia de monitoreo de las metas de Copenhague a través del ejemplo concreto de Social Watch. Los Cuadernos 4 y 5, coordinados por el equipo de Investigación de Social Watch, abordan la pobreza y desigualdad en América Latina y los vínculos entre pobreza y derechos humanos. Los Cuadernos Ocasionales están disponibles en: <www.socialwatch.org/es/taxonomy/term/459>.



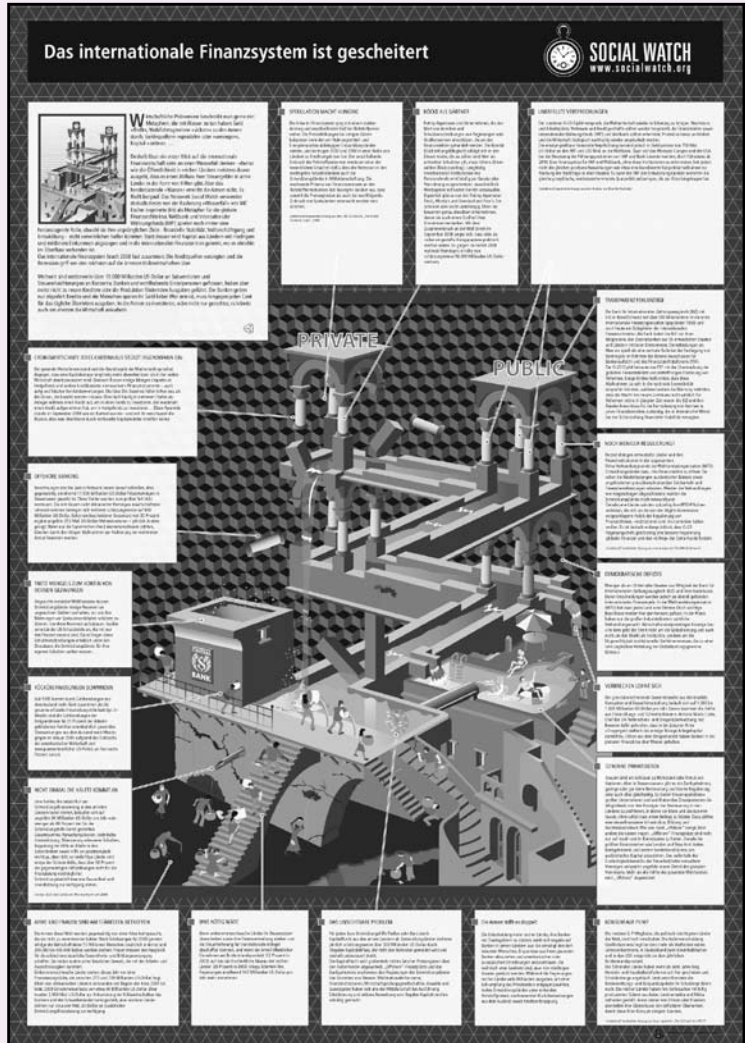
permanente en Naciones Unidas y coordinar esfuerzos de incidencia con misiones nacionales ante la ONU, las agencias internacionales y otras redes de ONG. Ha venido asistiendo a sus miembros en sus distintas participaciones en los procesos globales de toma de decisiones e informando regularmente acerca de ellos a las coaliciones nacionales.

Una red flexible

El "punto de encuentro" ha crecido y se ha transformado en varios aspectos, pero manteniendo siempre las ideas y objetivos que acompañaron su fundación. En el proceso preparatorio de la Cumbre Social de Copenhague, las organizaciones de la sociedad civil adoptaron formas *ad hoc* flexibles de organizarse como red. No se crearon estructuras formales ni se estableció un comité de dirección o grupo coordinador estable. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) prefirieron coordinar las acciones en espacios horizontales y abiertos, lo que para algunos analistas sentó un precedente para el formato organizativo que asumiría luego el Foro Social Mundial. Varias de estas organizaciones formaron, y aún conforman, la espina dorsal de Social Watch, lo que hace que la estructura y funcionamiento de la red mantengan gran parte de la flexibilidad y apertura originales.

Además de las coaliciones nacionales, la estructura de la red tiene tres componentes centrales: la Asamblea General, el Comité Coordinador y el Secretariado Internacional. En los últimos años también se establecieron estructuras de coordinación regionales y subregionales, como un espacio de coordinación pero no necesariamente como una instancia intermedia para vincular lo local con lo global.

La red Social Watch no es una entidad constituida con personería jurídica y su punto de partida no fue la redacción de sus estatutos de funcionamiento. En cambio, se creó un Memorando de Entendimiento básico (ver recuadro) entre las coaliciones nacionales y la red, que funciona como marco, donde se establecen las expectativas para el trabajo en conjunto, respetando





la autonomía de los miembros y la toma de decisiones democrática y horizontal. Uno de los principios fundamentales que distingue a Social Watch de otras redes internacionales de la sociedad civil es que no existe una estructura central que provea de fondos a sus miembros. Esta lógica de funcionamiento evita no sólo las tensiones asociadas a una relación de tipo donante/receptor al interior de la red, sino también la pérdida de energía en discusiones sobre fondos, presupuestos, informes y procedimientos, lo que ha fortalecido el sentimiento de pertenencia de los miembros.

Cada una de las Coaliciones Nacionales decide la manera en que se organiza, de acuerdo a las condiciones en cada país. La membresía de Social Watch es muy diversa, incluyendo desde institutos o centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, sindicatos, grupos de mujeres, organizaciones rurales y otras.

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano máximo de dirección de la red. La discusión política y planificación estratégica de largo y mediano plazo se realiza en este espacio, que sirve como un foro para la toma de decisiones pero también como un espacio para reforzar el sentido de pertenencia y fortalecer la identidad y unidad de la red. Esta instancia tiene lugar cada tres años y hasta ahora se ha realizado cuatro veces: en Roma en 2000, Beirut en 2003, Sofía en 2006 y Accra en 2009². La asamblea 2011 tendrá lugar en Filipinas. Además de fijar las prioridades para el mediano y largo plazo e identificar las alianzas potenciales dentro de la estrategia de incidencia, la Asamblea elige a los miembros del Comité Coordinador a quienes se delega la coordinación y el liderazgo político entre asambleas.

2 Los Informes finales, documentos de base y otros materiales de estas cuatro Asambleas están disponibles en: <www.socialwatch.org>.

Comité Coordinador

El Comité Coordinador (CC) es el organismo político central en el trabajo "cotidiano" de la red, con una estructura que necesita de una comunicación fluida y se instrumenta principalmente a través de una lista de correo electrónico, además de las reuniones presenciales realizadas dos veces al año y conferencias telefónicas regulares para abordar temas específicos.

Dado que el CC tiene la tarea de "asegurar la visibilidad política y la participación de la red en espacios y procesos relevantes"³, su integración busca la representación geográfica y el equilibrio de género pero también considera el aporte en términos de experiencia y capacidades que sus miembros pueden brindar al conjunto de la red. En general, las decisiones del CC han sido adoptadas por consenso, y las mismas son oportunamente informadas a los watchers. La participación constante de dos miembros del Secretariado como miembros *ad hoc* del CC asegura la coordinación entre los dos organismos. Al Secretariado le corresponde apoyar y llevar adelante las decisiones tomadas en este espacio.

Secretariado Internacional

El Secretariado es el principal organismo ejecutivo de Social Watch. La primera evaluación externa de la red (1995-2000) ya destacaba que "de los varios roles al interior de la red, el del Secretariado es el que más ha cambiado" (Hessini y Nayar, 2000). En sus inicios la tarea del Secretariado se limitaba a garantizar la producción del Informe, pero evidentemente ha ido incorporando una serie de funciones nuevas resultantes del crecimiento de la red, incluyendo actividades de investigación, capacitación, promoción de campañas, y representación de la red en varios foros internacionales.

3 El documento que describe la naturaleza y el mandato del Comité Coordinador se acordó en la II Asamblea General de Beirut en 2003. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/node/9389>.

Promoviendo la responsabilidad

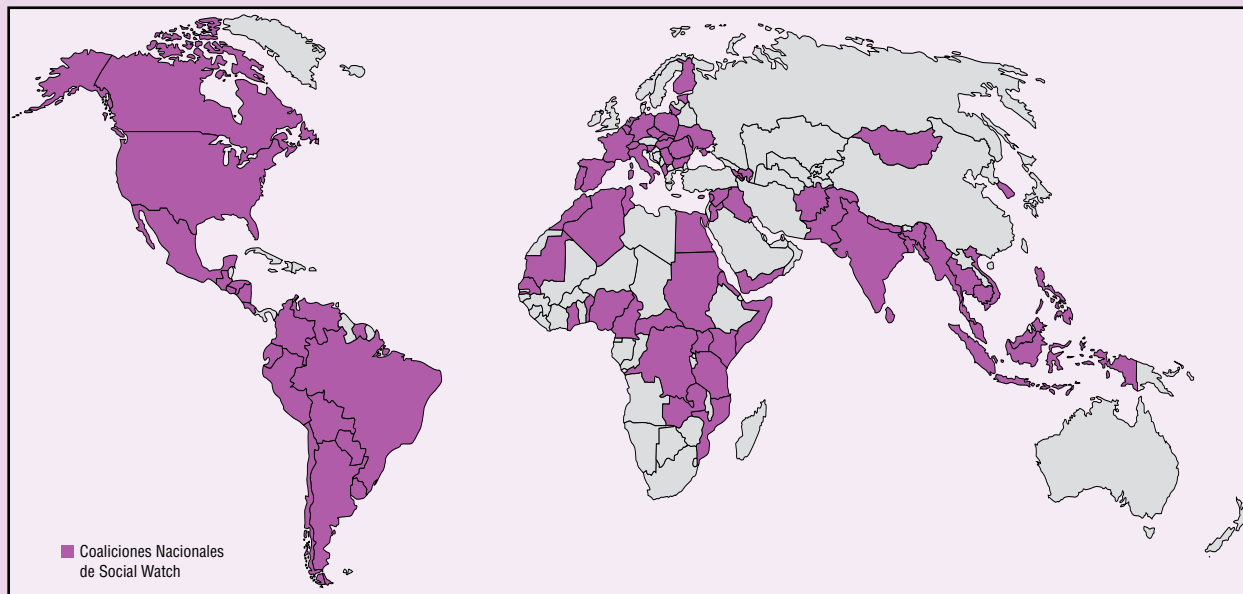
La Asamblea de Accra, que tuvo lugar en octubre de 2009, suscribió el concepto de "responsabilidad mutua" entre los miembros y entre los diferentes cuerpos de su red (secretariado, CC, miembros). Social Watch cree que la acción fundamental para alcanzar la erradicación de la pobreza, la equidad de género y la justicia social pasa en primer lugar a nivel local y nacional, por lo tanto, sus actividades y estructuras internacionales deben ser responsables y estar al servicio de las instancias nacionales y locales, y no al revés.

Social Watch alcanzará sus objetivos mediante una exhaustiva estrategia de apoyo, concientización, monitoreo, desarrollo organizacional y trabajo de redes. Social Watch promueve un desarrollo sostenible centrado en la gente. La paz es una precondition para la realización de los derechos humanos y de las mujeres y la erradicación de la pobreza. Pero al mismo tiempo la pobreza y la falta de respeto por los derechos humanos están en la base de muchos conflictos armados. Por lo tanto el impacto devastador que tienen las situaciones de conflicto y posconflicto sobre las personas es de particular preocupación para Social Watch. ■

Referencias

- Friedlander, E. y Adams, B. (2006). *Informe de evaluación externa 2001-2005*. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/noticias/documentos/Evaluacion_Externa_SW.doc>.
- Hessini, L. y Nayar, A. (2000). *Un Movimiento hacia la Justicia Social. Informe de Evaluación. Análisis Estratégicos para la Equidad de Género (SAGE)*. Nueva York. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/acercaDe/evaluacion.htm>.
- Social Watch No. 0 (1996). *Punto de partida*. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/informelmpreso/informe1996.htm>.
- Social Watch (2006). *Estrategia y Marco de Actividades 2007-2009*. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/noticias/documentos/Estrategia2007_2009_AGSofia2006.doc>.
- Van Reisen, M (2001). *Los dientes del león. La prehistoria de Social Watch*. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Disponible en: <www.socialwatch.org/es/informelmpreso/images/otrasPublicaciones/ZOOM_01_esp.pdf>.

Social Watch en el mundo



SOCIAL WATCH

COMITÉ COORDINADOR

Tanya Dawkins (EEUU) y Emily Joy Sikazwe (Zambia), co-presidentas. Barbara Adams (Nueva York), Nancy Baroni (Canadá), Yao Graham (Ghana), Yasmin Ismail (Egipto), Allam Jarrar (Palestina), Himanshu Jha (India), Gustavo Luna (Bolivia), Edward Oyugi (Kenia), Norayda Arabella Ponce Sosa (Guatemala), María Victoria Raquiza (Filipinas), Genevieve Tisheva (Bulgaria), Mirjam van Reisen (Bruselas) y Roberto Bissio (Uruguay, *ex officio*).

El Secretariado Internacional de Social Watch se encuentra en Montevideo, Uruguay, y tiene su sede en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Redactor Responsable
Roberto Bissio

Editor
Amir Hamed

Producción
Ana Zeballos

Asistente
Nathalia Blanco

Equipo editorial
Gustavo Alzugaray, Enrique Buchichio, Silvana Silveira

Asistente del equipo editorial
Lorena Logiuratto

Investigación en Ciencias Sociales
Juan Andrés Moraes (Departamento de Ciencia Política, Universidad de la República, Uruguay)
Santiago López Cariboni (Department of Government at the University of Essex)

Cabildeo y Networking
Ana Inés Abelenda, Mariana Más

Traducción
Olga Acosta, Laura Bissio, Clio Bugel, Lucía Colombino, Marcela Dutra, Bachir El Omari, Richard Manning, María Laura Mazza, Álvaro Queiruga, Álvaro Sahonero, Alejandra Trelles, Mercedes Ugarte

Apoyo técnico
Arturo González

Diseño y desarrollo Web
Ximena Pucciarelli, Ernesto Rapetti

© Copyright 2010
INSTITUTO DEL TERCER MUNDO
18 de Julio 1077/903, Montevideo 11100, Uruguay
item@item.org.uy
Fax: +598 2902 0490 int. 113

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo de la Unión Europea y Oxfam Novib.



 Oxfam Novib

El Secretariado Internacional de Social Watch también recibe financiamiento y apoyo de la Fundación Ford y de la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur - 11.11.11.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Social Watch y en ningún caso debe considerarse que refleje los puntos de vista de la Unión Europea, Oxfam Novib, de la Fundación Ford ó de la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur - 11.11.11.

Diseño maqueta original:
MONOCROMO

Diagramado:
FORMA ESTUDIO
www.formaestudio.com
Teléfono: +598 2916 3273

Foto de portada: ©istockphoto.com/veslívio

Infografías artículo ICB: www.icodemon.com

Impreso en:
Gráfica Mosca

Impreso en Uruguay
Edición hecha al amparo del Art. 79 de la Ley 13.349
(Comisión del Papel)

Dep. Legal: 353.564

Por órdenes, pedidos y suscripciones comunicarse a:

Social Watch
Casilla de Correo 1539
Montevideo 11000, Uruguay
socwatch@socialwatch.org
www.socialwatch.org
Teléfono: +598 2902 0490
Fax: +598 2902 0490 int.113

El contenido de esta publicación puede ser reproducido por organizaciones no-gubernamentales con fines no comerciales (enviénnos copia, por favor).

Cualquier otra forma de reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación de datos, o transmisión por cualquier medio, con fines comerciales, requiere autorización previa de ITeM.



La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo de la Unión Europea y Oxfam Novib.



IRAQ: Hay que aprovechar la oportunidad y no sólo promover la rehabilitación social del país sino también impulsar y apoyar las nuevas estructuras institucionales, la legislación y su aplicación para proteger los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer.

ESTADOS UNIDOS: ... la peor crisis económica desde 1929 ha acelerado una larga erosión de victorias ganadas en derechos humanos, oportunidad económica y justicia social.

BOLIVIA: El modelo extractivo (...) saca más dinero del que hace ingresar al país.

SOMALIA: Los recursos conseguidos por medio de la piratería son casi tan importantes como los que provienen de la Comisión Europea.

ITALIA: El financiamiento para el desarrollo también sufrió una reducción drástica e Italia no está cumpliendo sus compromisos internacionales.

ESLOVENIA: ... si Eslovenia ha de sobrevivir en el nuevo escenario internacional tiene que experimentar cambios en los paradigmas social, político y económico.

AFGANISTÁN: Los recursos no deberían ser usados con fines políticos y militares sino para establecer un espacio humanitario para el desarrollo.

NEPAL: ... trabajadores son traficados a través de las fronteras, maltratados e incluso convertidos en esclavos. Sólo en 2009, al menos 600 nepaleses murieron en los Estados del Golfo y Malasia.

MÉXICO: (Hay) estados sureños con valores parecidos a los de las regiones más pobres del mundo.

NUEVO ACUERDO SOCIAL: Únicamente la transformación total de la sociedad, organizada en torno a una nueva lógica, puede conducir a un mundo en el que la prioridad sea cubrir las necesidades de los seres humanos y no las ganancias empresariales.

TANZANIA: ... el desembolso de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a menudo se demora y no acompaña el proceso del presupuesto nacional.

BANGLADESH: Si bien la contaminación que produce es mínima, el país es una gran víctima del calentamiento global.

CAMBIO CLIMÁTICO: ... combatir la crisis climática (requiere) la participación eficaz, transparente y responsable de todos los grupos de interés — gobiernos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones financieras — de manera integral.

CROACIA: Intentar reducir la pobreza y la inequidad mientras se adoptan pautas neoliberales ha demostrado no sólo ser poco realista sino también imprudente.

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA CRÍTICA: Si los actores y administradores financieros todavía quieren invertir en empresas no sostenibles (...), dejémosles en claro que no queremos ser sus cómplices.

GÉNERO: Ha llegado el momento de un nuevo paradigma de desarrollo con iguales derechos y oportunidades para todos y todas.

Social Watch es una red internacional de organizaciones ciudadanas que luchan para erradicar la pobreza y las causas de la pobreza, para poner fin a todas las formas de discriminación y de racismo, para asegurar una distribución equitativa de la riqueza y para la consecución de los derechos humanos. Nuestro compromiso es para con la paz, la justicia social, económica y de género, y ponemos el acento en el derecho de todas las personas a no ser pobres.

Social Watch hace responsables a los gobiernos, al sistema de Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales del cumplimiento de los compromisos nacionales, regionales e internacionales para erradicar la pobreza.

Descargue la versión completa de este informe o adquiera ejemplares en: www.socialwatch.org